

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



# NUESTROS DERECHOS TERRITORIALES

LAS AGUAS FRONTERIZAS

POR

PEDRO S. LAMAS



1912

BUENOS AIRES



**REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY**

—o—o—

# NUESTROS DERECHOS TERRITORIALES

**LAS AGUAS FRONTERIZAS**

POR

**PEDRO S. LAMAS**



**1912**

**BUENOS AIRES**



# Nuestros derechos territoriales

---

## Las aguas fronterizas

---

Ninguna cuestión ha apasionado más hondamente, más perdurablemente á los pueblos de América, que la referente á la fijación de sus líneas fronterizas, herencia de las coronas rivales que se habían dividido las extensas comarcas de nuestro continente austral.

Las bulas de Alejandro VI, los tratados de Tordesillas, año 1694, de Utrecht, 1713, y el de San Ildefonso, 1777, si bien fueron precisando, en lo posible, los límites de las colonias de ultramar, la deficiencia de los conocimientos geográficos, hacía con que, al aplicarse al terreno las convenciones teóricas, por así decir, surgieran, constantemente, conflictos de interpretación que sobrevivieron á la emancipación.

Pero no solamente se ha tratado de las desinteligencias entre todos los pueblos oriundos de la corona de Castilla que lindaban con los dominios que fueron de la casa de Portugal y su heredero, el Brasil, sino, igualmente, de las disidencias y conflictos originados, respecto al deslinde y adjudicación de sus legítimas, entre las diversas secciones de la América española.

Prolija sería la enumeración de esas disidencias entre los Estados independisados del nuevo mundo, razón de ser de casi todos los odios y distanciamientos entre hijos de una misma madre, cuyo patrimonio se dividían, disputándose sus inciertos girones. Pero después de un siglo, esas controversias y litigios se han solucionado, casi por completo, precisándose y adjudicándose las respectivas porciones de la herencia.

El proceso ha sido engorroso y pertinaz, y más de una vez la ley del más fuerte se sobrepuso al derecho, conculcándolo, ignominiosamente para el acaparador; otras veces, empero, se recurrió al arbitraje, vale decir, á la justicia internacional, cuando no se adoptó, como base de demarcación, el «uti possidetis», ó sea la posesión, uso y goce de las tierras ó aguas fronterizas, materia de la pretensión ó litigio.

La República Oriental del Uruguay, contrariamente á las demás fracciones de América, nació á la vida propia de nación con límites definidos; en efecto, su origen no fué colonial sino que su consagración é independencia arranca de la convención preliminar argentina-brasilera de 27 de Agosto de 1828, por la que se declaraba, por parte del Brasil, que «la Provincia de Montevideo, llamada hoy Cisplatina, queda separada del territorio del Imperio del Brasil, para que pueda constituirse en Estado libre é independiente de toda y cualquier nación», al mismo tiempo que, por parte del Gobierno de las Provincias Unidas se decía que «concordaba en declarar la independencia de la Provincia de Montevideo, llamada hoy Cisplatina». Y como la Provincia de Montevideo, «llamada hoy Cisplatina», tenía límites, definidos en el acta de la incorporación al Reino de Portugal, Brasil y Algarves, de 21 de Julio de 1821, incorporación pactada entre el «Congreso extraordinario que representaba á los pueblos de la Provincia» y el Barón de la Laguna, que representaba al Rey, no hubo que repetirlos en aquel tratado preliminar, como no hubo tampoco y consecuentemente necesidad de especificarlos en la Constitución de la República, sancionada en 10 de Septiembre de 1829 y jurada en 18 de Julio de 1830, desde que en su preámbulo se invoca, como título habilitante, aquella convención de Paz del año 28 «entre la República Argentina y el Imperio del Brasil», en que se declaraba la independencia de la Provincia ó Estado Cisplatino. Así, pues, los límites, prolijamente designados en el acta de incorporación del año 21, se reproducían, tácitamente, como los de la República Oriental del Uruguay en el texto de su Constitución.

Esos límites, consignados en el acta de incorporación, «que son los mismos que tiene y se le reconocían á la Provincia Oriental al principio de la revolución», dice el Art. 2º., son los siguientes: «por el Este el océano; por el Sur el Río de la Plata; por el Oeste el Uruguay; por el Norte el Río Quareim hasta la cuchilla de Santa Ana

que divide el río Santa María y, por esta parte, el arroyo de Tacuarembó Grande, siguiendo á las puntas del Yaguarón que entra en la laguna de Miré y pasa por el puntal de San Miguel á tomar el Chuy, que entra en el Océano».

Hay que observar, que si bien en 1821 la Provincia Oriental se incorporó á Portugal, constituyendo el Estado Cisplatino, en 1825, esa misma Provincia, por el voto de la «Junta Provincial», se declaró incorporada á las Provincias Unidas del Río de la Plata, acreditándose un representante ante el Congreso General de Buenos Aires, hecho, este último, el de la incorporación de la Provincia Oriental á la Argentina de que ésta hizo caso omiso en el texto de la Convención de Paz del año 28, reconociendo, por tanto, que la que se independizaba no era esa Provincia Oriental, que se le había incorporado, sinó el «Estado Cisplatino», hecho importante, porque si lo contrario hubiera sucedido, esto es, si hubiera sido la «Provincia Oriental del Río de la Plata», la que, según, el texto de la Convención preliminar de Paz, debía «componer» el nuevo Estado, libre é independiente, se hubiera podido alegar, con cierta lógica, que sus límites no habían sido establecidos; pero, como queda dicho, lo que se independizó fué el Estado Cisplatino, y este Estado tenía sus límites inequívocamente definidos, y definidos no exclusivamente por el Brasil, sinó con el acuerdo y firma, en 1821, de los pueblos orientales, vale decir, del «Congreso extraordinario de la Provincia».

Y ya que hago notar esta circunstancia, debo agregar que ella quizá nos favoreció, desde que si no hubiera sido el Estado Cisplatino el independizado y hubieramos nosotros alegado que nuestra Nación no tenía fronteras fijas y reconocidas, puesta, por nosotros mismos, la cuestión en tela de juicio, el resultado hubiera sido, muy probablemente contraproducente, pues en vez del Cuareim el Brasil no nos hubiera quizá reconocido, por el Norte, sobre el río Uruguay, sinó el Arapey, límite que los río-grandenses habían siempre pretendido, lo que consta especialmente de documentos emanados de la municipalidad fronteriza de Alegrete, que así lo significaron al general Ribera, cuando su invasión á Misiones, exigiéndole el general Barreto «que se trasladase con sus arreos á la costa Sur del Arapey», (Historia de las Repúblicas del Plata, por don Antonio Díaz). Corroborando este hecho puedo agregar que el Dr. Andrés Lamas obtuvo en Río de Janeiro la comprobación, que comunicó al Gobierno,

que había sido convenido entre el General Guido y la cancillería brasilera, al firmarse el tratado del 43, (que tenía por fin que el Brasil ayudaría á Rozas á reponer á Oribe en el mando del Uruguay, servicio que este retribuiría contribuyendo á someter á los farrapos), que se fijaría en el Arapey el límite Norte uruguayo, confirmándose á la Argentina en la posesión de Martín García, tratado que Rozas no ratificó, ensoberbecido por el triunfo del Arroyo Grande.

Reanudando mi argumentación, diré que, efectivamente, en el Art. 1º. de la Convención preliminar, se dice, por parte del Brasil, que «la Provincia de Montevideo, llamada hoy Cisplatina, queda separada del territorio del Imperio del Brasil» y, en el Art. 2º. que el Gobierno de las Provincias Unidas «concuerta» en declarar la independencia de la Provincia de Montevideo, llamada hoy Cisplatina». Luego, la Argentina, noobstante Ituzaingó, reconocía que del acto de incorporación del año 21, se pasaba directamente á la Convención Preliminar de 1828, haciendo abstracción, como no existente, como si no se hubiera producido la declaratoria de incorporación del año 25, consecuencia de la hazaña de los 33, de sus éxitos militares, de la declaratoria de independencia de la Florida, por medio de la cual, los pueblos de la margen oriental del Uruguay recuperaban su libertad para disponer de sus destinos, lo que hacían incorporándose, acto continuo, á las Provincias argentinas. Por otra parte, «los Representantes nombrados por los pueblos situados á la parte Oriental del Río Uruguay que, en conformidad de la Convención Preliminar de Paz, celebrada entre la República Argentina y el Imperio del Brasil, en 27 de Agosto del año próximo pasado de 1828, deben componer un Estado libre é independiente», etc., concordaron, ellos también, con que esta Convención preliminar constituía el título habilitante de la nueva soberanía, pues no se enumera ó invoca ningún otro; esto es, concordaron los constituyentes del año 29 que lo que se independizaba era el «Estado Cisplatino» del año 21, haciendo abstracción, silenciando, ellos también, las heroicidades y patriotismo del año 25, sus declaratorias, así como los anteriores y gloriosos esfuerzos de los pueblos uruguayos por sacudir tutelas, vinieran de donde vinieran.

La consecuencia directa é inmediata del hecho que ligeramente acabo de analizar, es que si lo que se independizaba era el Estado Cisplatino, los límites de la República que surgía serían los de ese Estado, por otra parte prolijamente designados en el acta de incorporación del año 21; pero ya que, para llegar á esta demostración,—pues de lo que especialmente me ocupó en estas páginas es de analizar los hechos y los derechos fronterizos de nuestro país,—ya que he colocado en transparencia que al constituírnos en nación soberana é independiente no invocamos, en nuestra carta fundamental, más razón ni más voluntad que la razón y la voluntad de nuestros grandes vecinos, voy á abrir un ligero pero interesantísimo paréntesis.

Al iniciarse, en 1858, en la corte del Brasil, las negociaciones entre los plenipotenciarios del Brasil, de la Argentina y del Uruguay, para convenir los términos del tratado definitivo de paz cuyo preliminar lleva la fecha de 27 de Agosto de 1828, el doctor Andrés Lamas, en representación de su país, trató, ante todo, de que se restableciera una verdad histórica y se reparase un error deprimente para nuestra nacionalidad, consiguiendo, por fin, que el Art. 1º. de ese tratado se redactase en la siguiente forma:

«Las altas partes contratantes, reconocen: 1º. que la Convención Preliminar de Paz de 27 de Agosto de 1828, «de acuerdo con la voluntad manifestada por el Pueblo Oriental del Uruguay», lo reconoció Nación libre é independiente, intermedio entre el Imperio del Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy Confederación Argentina», etc.

En la nota de remisión, fecha de Enero de 1859, del tratado que, por parte del Brasil, llevaba las firmas del señor José María da Silva Paranhos (después Barón y más tarde Visconde do Río Branco) y del ilustre Visconde do Uruguay, firmante de los tratados del 51, por la Argentina del Dr. Luis José de la Peña y por el Uruguay del Dr. Andrés Lamas, este último decía á su gobierno relativamente á aquella justa reparación nacional:

«El Brasil y la República Argentina han hecho hidalgamente la reparación de un vacío dolorosísimo para todos los orientales, que encerraba la Convención de 1828.

«En ella se estipulaba, por la voluntad y el interés de las Altas Partes Contratantes, la independencia de la entonces Provincia Oriental.

«No aparecía en el acta de nuestra nacionalidad una sólo palabra que se refiriese á nuestra propia voluntad.

«Tal omisión, á la par de dolorosísima, era peligrosa.

«Los documentos oficiales, los actos diplomáticos permitían sostener esa omisión; pero toda nuestra historia protestaba contra ella.

«Y protestaba muy elocuentemente la historia especial de la guerra de 1825 á 1827, á la que la dicha Convención ponía término.

«Treinta y tres orientales, de imperecedera memoria, la iniciaron el 19 de Abril de 1825 por el acto sin igual en los fastos americanos; nuestros representantes, reunidos en la Florida, la promulgaron, rodeados de las bayonetas extranjeras en el acta de 25 de Agosto de aquel año, y nuestros conciudadanos, «solos», venciendo en Haedo y Sarandí, decidieron la libertad de todo el territorio de su patria, con la única excepción de las plazas fortificadas del litoral.

«Esos hechos, cuya heroicidad es parte de la gloria de los valientes soldados contra quienes combatieron los orientales, ese alzamiento unánime de todo un pueblo que inicia, que delibera, que obra, que vence por sí solo, revela y constituye, él solo, una nacionalidad, es la voluntad y es el derecho.

«El Brasil y la Confederación Argentina, levantándose sobre los actos oficiales y diplomáticos, hijos de las circunstancias, acaban, con inmenso honor suyo, de declarar que, «reconociéndonos nación libre é independiente, obraron de acuerdo con la voluntad manifestada por el Pueblo Oriental del Uruguay».

«La justicia queda hecha; el peligro queda desvanecido».

Y aunque, puedo agregar, el tratado no subsistió, la justicia quedó hecha, bajo la firma de eminentes ciudadanos de nuestros dos grandes vecinos.

Resta ahora que nosotros, al reformar nuestra Constitución, borremos la mancha que hemos consentido durante ochenta años en el acta de nuestra soberanía.

Y á propósito, un ilustrado compatriota, colocado al frente de uno de nuestro más importantes y autorizados órganos de opinión, tratando, precisamente, de la reforma constitucional, se expresaba, hace poco, en los siguientes términos («El Diario del Plata» de 9 de Marzo de 1912):

«El acta,—incorporada á la Constitución—levantada por los comisarios internacionales que, en nombre del Brasil

y la Argentina dieron su «conformidad» para la jura y aplicación de nuestra ley fundamental, y el decreto uruguayo que, fundándose en esa conformidad, ordena y reglamenta la jura de la Constitución,—dejando así, ambos documentos, en la pila bautismal de nuestro país una mancha á nuestro origen y á nuestro nombre,—eso no ha alterado nunca el sueño de nuestros patriotas.

«En cambio, cuando, en 1859, don Andrés Lamas, para borrar esa mancha, negoció el ajuste complementario de la Convención de paz,—y obtuvo del Brasil y de la Argentina la declaración de que, «al reconocernos como nación libre é independiente, obraron de acuerdo con la voluntad manifestada por el pueblo oriental...», los anárquicos de la intelectualidad uruguaya,—ya entonces!—destruyeron esa obra patriótica y malograron á la vez,—contra su país,—una de las más grandes victorias de nuestra diplomacia».

— — —

Volviendo á las cuestiones, á los antecedentes de los límites de la República: ya hemos visto que la Convención Preliminar del año 28 lo que declaró independizado, lo que entregó á los orientales para que en él organizaran una nación libre é independiente, fué el Estado Cisplatino, ese Estado y no otro, ese territorio y no otro. Así lo declaró el Brasil, así lo declararon las Provincias Unidas del Río de la Plata, así lo aceptaron y reconocieron «los representantes nombrados por los pueblos situados á la parte Oriental del Río de la Plata», como reza el preámbulo de la Constitución sancionada en 10 de Septiembre de 1829, así lo reconocieron y aceptaron «las autoridades eclesiásticas, civiles y militares y todos los ciudadanos del Estado» al jurar, solamente, en 18 de Julio de 1830, aquella Constitución ¿Y cuales eran los límites del Estado Cisplatino, cuál era aquel territorio separado del territorio del Imperio del Brasil?» Esos límites constan del acta de incorporación del año 21, de una manera precisa, inequívoca; salvo en la parte de las aguas del río Yaguarón y de la laguna Merin, de que más tarde me ocuparé; límites reconocidos, aceptados por el «Congreso que representaba á los pueblos de la Provincia» al pactar la incorporación con el Barón de la Laguna, en nombre del rey de Portugal, Brasil y Algarves.

No parece que cupiera duda ó tergiversación alguna ante hechos tan precisos, ante circunstancias que arro-

jan tanta claridad y precisión. Y tan es así, que el nuevo gobierno, oriundo del Convenio del año 28 organizó la administración del país «dentro» de los límites del antiguo Estado Cisplatino, mientras las autoridades brasileras continuaban ejerciendo su soberanía, sin la mínima observación ni protesta, inmediatamente después de las líneas divisorias establecidas por el acta de incorporación del año 21.

Los orientales, en 1821, se incorporaron al reino de Portugal, Brasil y Algarves con todo el territorio que poseían, con todas las tierras y aguas que ocupaban y constituían su patrimonio nacional, cuyos límites se declararon ó fijaron claramente en el solemne documento constitutivo del Estado Cisplatino, y el Brasil devolvió á los orientales, en 1828, para que en él establecieran una nación libre é independiente aquellos mismos é inventariados territorios, por así decir.

Los constituyentes del año 29, declararon, en el preámbulo de la carta fundamental, que ellos eran «los representantes de «los pueblos» situados á la parte Oriental del Río Uruguay que, de conformidad con la Convención de 27 de Agosto de 1828, «deben componer un Estado libre é independiente». ¿Y cuáles eran esos pueblos, ellos y no otros, que, según los diplomas exhibidos por cada representante, debían componer el nuevo Estado independiente? Esos pueblos eran los de Montevideo, Canelones, Soriano, Paysandú, Colonia, San José, Maldonado, Durazno, Cerro Largo, esto es, pueblos, todos ellos, comprendidos dentro del radio, y ninguno fuera de él, de los límites designados en el acta de incorporación del año 21, radio que «conservó siempre, que no dejó nunca de conservar, que conserva hasta hoy día» la República, no obstante las vicisitudes, trastornos y aciagos momentos que registra su turbulenta historia. Luego, es obvio deducir que los pueblos, esto es, los territorios de las circunscripciones ó departamentos representados, respectivamente, por sus diputados de la asamblea constituyente, eran los que debían componer, ellos y no otros,, ellos únicamente el nuevo Estado libre é independiente.

Las declaratorias de la Florida del año 25,—si bien de ellas no debían subsistir sino los destellos de una gloria inmarcesible y la comprobación de que nuestros pueblos eran dignos de la libertad que al fin les fué otorgada y reconocida,—no contradicen el hecho de las fronteras fijadas por la incorporación al reino de Portugal, Brasil y

Algarves en 1821; en efecto, con esas mismas fronteras se incorporó la Provincia Oriental, en 1825, á las Provincias Unidas del Río de la Plata, con lo que se confirma, una vez más, que ante el derecho, ante la legalidad, ante la fuerza de los pactos, ante la buena fé de las convenciones, la nueva República no podía pretender más límites que los componentes del Estado Cisplatino, los que conservó íntegramente hasta hoy día, como queda dicho.

Este criterio, esta interpretación, única que cabía ante el examen reposado y desapasionado de los textos, es compartido generalmente; y no acabaría si hubiera de referirme á las opiniones más autorizadas al respecto; pero quiero reproducir los siguientes párrafos que me caen bajo los ojos, referentes al asunto de que me ocupo:

«En lo principal, el deslinde estaba establecido por los hechos y por la naturaleza. Esa inteligencia derivaba de la denominación de Provincia «Cisplatina» dada al Estado que se emancipaba, con referencia al acta de incorporación á Portugal, en la cual fueron especificados, en efecto, aquellos límites.

«La idea de que la Convención preliminar establecía los límites del Uruguay se fundaba, según se ha dicho, en la clasificación de «Cisplatina» que esa Convención daba á la Provincia llamada á constituirse en Estado soberano. Florencio Varela, que estudió esa cuestión en 1845, suponía también que aquella denominación implicaba el reconocimiento del deslinde establecido en el pacto de incorporación á Portugal. («Agustín de Vedia». Martín García).

Habla ahora otro distinguido historiador:

«¿Cuáles eran los límites de la antigua Banda Oriental? cuáles los del Estado Cisplatino? y cuáles los que tuvo la República Oriental del Uruguay al ser reconocida como nación libre é independiente?

«Pues bien, ni al incorporarse al Brasil en 1824, ni durante las luchas de la independencia, ni mediante tratado alguno, se modificaron jamás esos límites en la parte relativa al Río de la Plata y al Río Uruguay (ni en cuanto á la parte terrestre, salvo detalles de demarcación, N. del A.). «De manera, pues, que á la antigua Banda Oriental «no se le segregó» en la época del reconocimiento de su independencia, (ni después, como se comprobará en estas páginas, N. del A.), «ni la más mínima lonja de tierra», respetándose, por lo tan-

to, lo que disfrutara desde luengos años. («Setembrino E. Pereda». Martín García).

---

No han hecho obra ni de lealtad ni de patriotismo los que han venido propagando, desde tiempo atrás, ideas erróneas al respecto, los que, consiguiéndolo en parte, han tratado de extraviar el juicio público relativamente á un asunto de naturaleza delicada, que afecta intereses fundamentales de la nación.

La cuestión de límites ha sido un filón explotado por políticos de mala fé, pues no titubeában en sublevar la opinión, aseverando, como arma de partido, como medio de combatir maliciosamente á gobiernos, de deprimir á eminentes servidores del Estado, que se había desmembrado á la República, calumniándolos, invectivándolos, acusándolos á aquellos gobiernos y á aquellos ciudadanos de haber consentido en hondas mutilaciones de nuestro patrimonio territorial.

Algunos de los ciudadanos aludidos, concientes de haber contribuído, en múltiples oportunidades, al afianzamiento nacional, de haber salvaguardado, en la esfera de sus posibilidades, sus intereses, morales y materiales, de haber defendido sus derechos esenciales, celosos, como los que más de las susceptibilidades, de las altiveces innatas de una patria acreedora, por sus servicios al progreso y á la civilización, al respeto y á la consideración de esta sección de América,—algunos de los ciudadanos aludidos, repito, hicieron caso omiso de aquellos cargos é invectivas, guardando silencio, confiados en que algún día, serenado el ambiente, calmadas las pasiones, se les haría justicia, tanto más que las personalidades ilustres de un país, son parte integrante de su gloria, cualquiera que haya sido la esfera de su actuación y renombre.

Nuestra República, la Nación cuya carta fundamental fué solemnemente jurada por todos los orientales el 18 de Julio de 1830,—esa Nación, esa República,—sin confundirla con conatos ó tentativas anteriores de organizaciones, en todo caso efímeras ó pasajeras, por muy patrióticas que fueran, como realmente lo fueron, que se disolvieron, que se desnaturalizaron ó abortaron quedando, apenas, de su actuación y esfuerzos, en las páginas de la historia, los rastros luminosos de heroicas tentativas hacia una aspiración de libertad y autonomía que no consigue

alcanzar formas tangibles y coherentes, ora incorporándose á uno de los grandes vecinos, ora al otro,—aquella Nación, aquella República, repetiré otra vez, se incorporó al consorcio universal de los pueblos organizados con su estructura social y política, dentro de un cuadro territorial propio y definido, porción geográfica perfectamente deslindada, cuya posesión se disputaron entre sí durante varios lustros los herederos de la corona de España y de Portugal en estas regiones antárticas del nuevo mundo, porción geográfica que, por fin fué cedida, por acuerdo de los contrincantes, á los naturales del país, con tal que éstos fundáran en ella un nuevo Estado, intermediario é independiente, solucionando así sus controversias al respecto, acto que, aceptado como fué, en su forma de cesión por dichos naturales, no traía aparejada, por esa razón, derechos propios anteriores, sobre todo para reclamar de los propios cedentes ensanches de soberanía respecto á lo que se aceptaba como un desprendimiento, y así se consagraba en la Carta fundamental del nuevo Estado.

De todos modos, pretender reivindicar la posesión del territorio de Misiones y una parte importante del Estado del Río Grande del Sud, restableciéndose los límites del tratado de 1777, aunque ese fuese nuestro derecho, cuando no lo era, honesta y legalmente considerada la cuestión, no pasaba de una utopía, de un lirismo, de una impracticabilidad material. Nuestro título territorial arranca de la Convención preliminar del año 28; lo que se independizó fué el Estado Cisplatino, eso y nada más, con sus límites precisos, definidos. ¿Cómo fundar derechos oriundos de la Corona de España? ¿Y cómo ejercitarlos contra una potencia como el Brasil, sobre todo cuando hubieramos tenido que luchar, al mismo tiempo con la República Argentina? Y á este último respecto, no cabe ilusión; además de la lógica de su actitud ante semejante eventualidad, referiré un hecho, histórico y sugestivo: en 1837, representaba á nuestro país ante la corte Imperial el general de ingenieros don José María Reyes, siendo el plenipotenciario argentino, á la sazón, en el Brasil don Manuel de Sarratea, quién tuvo conocimiento de insinuaciones de parte del Uruguay de obtener la modificación de los límites del Estado Cisplatino, que eran los que poseíamos; el general Reyes refería, y esto quedó escrito que, «tan arraigada estaba la idea en el Señor Sarratea de que el Uruguay no tenía otro título en que fundar sus derechos territoriales que los que

se derivaban de la Convención preliminar, esto es, los límites del Estado Cisplatino, que agregaba que, «su gobierno no permitiría jamás» que el Uruguay llevase sus pretensiones más allá de los contornos que ese pacto le señalaba».

Teníamos, por tanto, de una parte la falta de fundamento legal para iniciar una reivindicación semejante, como la carencia del indispensable vínculo de derecho para atribuirnos, tratándose del Virreynato, la representación de sus derechos sucesorios, nosotros que, en todo caso no poseíamos sino una mínima parte de lo que fuera su territorio. Y en esta situación, con semejantes títulos, ante el hecho, consignado en nuestra propia Constitución de que nuestro origen, de que nuestra existencia nacional arrancaba de un pacto entre el Brasil y la Argentina, países que se habían acordado en que convirtiéramos el Estado Cisplatino en una Nación libre é independiente, misión, mandato propiamente que se nos confiaba, en el interés de todos y que nosotros aceptamos,— en esta situación, repito, ¿cabía acaso que adoptáramos, con alguna probabilidad de éxito, una actitud de querellantes reivindicadores, respecto á tan inmensos territorios colindantes?

¿Habría un tratadista, un jurisconsulto, un internacionalista, independiente y competente que hubiera opinado que una gestión nuestra, relativamente á aquellas reivindicaciones hubiera podido prosperar?

Y considerada la actitud del punto de vista de la negativa, de la resistencia, de la oposición segura, inevitable, del rechazo absoluto por parte tanto del Brasil como de la Argentina de semejante pretensión; ¿qué hubiéramos hecho?; ¿hubiéramos protestado?; ¿para qué, con qué resultado y perspectiva?

Parecería ocioso impugnar semejante orden de ideas, y no lo hubiera hecho, aunque ligeramente, por mi parte, si no notára que pesiste aún, en cierta esfera social y política de estos países,—sedimento de una propaganda insidiosa, falsamente patriótica,—la idea de que, efectivamente, el Brasil nos ha «usurpado» millares de leguas de territorio y que son cómplices de esa usurpación, gobiernos y ciudadanos á quienes había interés político ó, mejor dicho, partidario en colocar en la picota de la opinión, sorprendida en su credulidad y buena fé.

Y esto no obstante que los principales factores de esas campañas de perversión y deshonra, que tan solícitos

se ostentaban en lo que titulaban el engrandecimiento de la patria, fueron reos, más tarde, de traición á la República, tramando la supresión de nuestra nacionalidad, la anexión de nuestro territorio á una nación vecina.

No me detengo, al exponer todo mi pensamiento, al exteriorizar, sin embajes ni reticencias, con absoluta franqueza, el juicio, íntegro, completo formado, como fruto de estudios y meditaciones detenidas sobre estas cuestiones, eminentemente nacionales, ante el temor de herir convicciones arraigadas ó de contrariar esperanzas ilusorias como resultado de declamaciones y alegatos sin fundamento.

El patriotismo no consiste en alhagar el sentimiento público, en exhibir á los ojos de las poblaciones, ávidas de engrandecimientos y conquistas, mirages conducentes, falseando hechos, tergiversando derechos y prerrogativas; contrariamente á semejantes actitudes y procedimientos, lo que consulta, en realidad, los intereses generales y propende al crédito y prestigio de las naciones, lo que las encamina con seguridad á la prosperidad y á la gloria es el proceder con buena fé, con lealtad y justicia, dentro del propio derecho y del derecho ageno.

---

No hay que perder de vista que al concertarse la paz del año 28, los orientales no componían un Estado, una Nación ni una agrupación, siquiera, independiente. En 1821, habían optado por la nacionalidad portuguesa, incorporándose al reino de Portugal, Brasil y Algarves y, en 1825, se declararon independientes para adherirse, acto continuo, en calidad de provincia argentina, á la comunidad de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y así es como si antes habían enviado un representante del Estado Cisplatino á Río de Janeiro, acreditaron otro, después, en nombre de la Provincia Oriental, ante el Congreso de Buenos Aires. Y sucedió que, al tratarse de la paz, después de Ituzaingó, los orientales no tuvieron voz ni voto en ese asunto ó, más propiamente dicho, al mismo tiempo que los plenipotenciarios brasileros invocaban la representación de los pueblos orientales, como dependientes del Imperio, los representantes argentinos hablaban en su nombre, como haciendo parte de la Confederación.

Y esto era lógico, porque los orientales habían abdicado su soberanía, delegándola ora en el Brasil ora en la Ar-

gentina, y de lo que se trataba en Río de Janeiro, en Agosto de 1828, entre los plenipotenciarios Balcarce y Guido, de un lado y Aracaty y Clemente Pereyra del otro era, precisamente, de desatar aquel nudo que nosotros mismos habíamos atado. Poco antes, el Ministro García nos había «devuelto» á la soberanía brasilera, pero ésta vez se nos declaraba independientes, y si alguna cosa preocupaba á aquellos plenipotenciarios era si nosotros lograríamos gobernarnos.

Los protocolos de las conferencias de la negociación revelan cuan profunda y sincera era, á ese respecto, la preocupación, igualmente compartida por los representantes de uno y otro país. Y así es como, en un momento dado, los plenipotenciarios del Imperio exteriorizan sus temores sobre la suerte de los habitantes, una vez que se retirásen las tropas y autoridades brasileras ó argentinas, exclamando, por fin, textualmente, según el Protocolo del día 11 de Agosto: «¿Cómo puede responder la República Argentina, de que no se renueven en la Cisplatina los tiempos calamitosos de Artigas, y que la guerra de partidos no vuelva á devorar aquellos pueblos?»

Los representantes argentinos, fueron más lejos que los brasileros, pues en vez de la permanencia de algunas fuerzas de los contratantes, durante un tiempo prudencial, en el territorio Cisplatino, proponían, además de esa precaución, textualmente, que «ambas partes acuerden y convengan en que la Provincia «ensaye» durante el período de cinco años «su capacidad política», fórmula, que fué rechazada airadamente por los plenipotenciarios brasileros por reputarla «ofensiva é injuriosa para los orientales, porque era lo mismo que darles por mitad la libertad que pretendían, y sujetarlos á un vergonzoso estado de pupilos.»

En el fondo, sin embargo, los plenipotenciarios de uno y otro país coincidían en la preocupación sobre la capacidad de los orientales para organizarse, para gobernarse, para conservar el orden, para garantizar la propiedad y la vida de los habitantes, temor que desgraciadamente nos encargamos nosotros de justificar, á través de tres cuartos de siglo de casi constante inseguridad y anarquía.

Y como coincidían en aquellas preocupaciones, convinieron en que, durante algún tiempo permaneciesen fuerzas brasileras y argentinas en el territorio oriental y que, después, durante cinco años, en caso de conmociones

concurrirían ambos países, con sus elementos, al restablecimiento del orden.

He relacionado ligeramente estos hechos tanto para dar una idea del ambiente en que se disponía de nuestra suerte y porvenir, como para explicar y dejar constancia de declaraciones, por parte tanto del Brasil como de la Argentina, que hacen directamente á nuestros asuntos fronterizos, que son de los que especialmente me ocupo en estas páginas.

El Brasil pretendía dejar una guarnición militar en la plaza de Montevideo hasta que el país se constituyese, sin precisar término ó pretendiéndolo prolongado, á lo que la Argentina, al fin, consentía con la condición, como garantía de la evacuación de la plaza de Montevideo, que las tropas de las Provincias Unidas permaneciesen, por igual tiempo, en la ocupación «del territorio brasilero de las Misiones orientales», pretensión que los plenipotenciarios del Imperio rechazaron con indignación, conviniéndose, por fin, que la Argentina, mientras el Brasil conservase fuerzas en Montevideo, conservaría 1.500 hombres en cualquier parte del territorio oriental, pero no en las Misiones, que era territorio brasilero.

En el protocolo de la conferencia del día 25 de Agosto de 1828 se lee lo que sigue: «los representantes argentinos expusieron que la República «no quería ni un palmo de terreno dentro de los límites del Imperio», y que la ocupación temporaria de las Misiones, guardaría únicamente la proporción con el tiempo que durase la evacuación de Montevideo, lo que era bien fácil de acelerar por parte de S. M. Y.»

Los ministros brasileros, contestaron que «el insistir en la ocupación de Misiones, importaba lo mismo que inutilizar todo lo que se había hecho»; y como los señores Balcarce y Guido replicaron que si no se les acordaba alguna otra garantía equivalente, tendrían que consultar á su gobierno, con riesgo de que, durante ese tiempo, se reanudasen las hostilidades, los brasileros dijeron que «S. M. Y., se había pronunciado decididamente contra conservación de tropas de la República dentro de las Misiones y, «de cualquier otro punto del territorio brasilero», y que, si la legación no abandonaba el artículo propuesto acerca de las «Misiones orientales» la negociación quedaba rota»; y la solución fué la expuesta, á saber: «que 1.500 hombres argentinos permanecerían,

en el punto que escogiesen, dentro del territorio de la Provincia.»

Lo recordado prueba, que fuera cual fuera la interpretación que se diera á lo referente á los límites del nuevo Estado creado por la Convención preliminar, fuerán los de la Cisplatina ó fueran otros, «quedaban excluidas las Misiones orientales de su jurisdicción ó territorio», con el acuerdo de ambos contratantes, que declaraban, expresamente, que esas Misiones orientales continuaban y continuarían siendo parte integrante de la soberanía del Imperio.

Y no hay que olvidar, que los plenipotenciarios argentinos hablaban, afirmaban, se comprometían en nombre de los orientales, como de los demás pueblos y ciudadanos de la Confederación, desde que, á tenor del acta de la Junta Provincial, presidida por Lavalleja, en 1825, al declarar incorporada la Provincia Oriental á la comunidad de las Provincias Unidas del Río de la Plata, quedaban haciendo parte integrante de esa entidad internacional.

---

Se trataba de algo más que de una cuestión de límites cuando, en 1847, el Gobierno de la Defensa le confió al Dr. Andrés Lamas una misión diplomática ante la corte del Brasil.

El gobierno que iba á representar, en cuyo nombre iba á hablar, á negociar, desde que de allí solamente, del Brasil podía venirle la anhelada salvación, tenía limitada su jurisdicción á una angosta península, sitiada por las bayonetas extranjeras, hacia cinco años, con el auxilio de un partido oriental que secundaba sus miras y propósitos.

A esa situación de extrema angustia se había reducido aquella autonomía que nos brindaran, en 1828, los dos grandes rivales que, después de las coronas coloniales, como herederos de sus ódios y derechos, se venían disputando nuestro codiciado y hermoso territorio.

No se trataba, no, de límites, se trataba de algo más, de mucho más, de vida, de existencia como nación libre é independiente.

En aquel largo batallar, desde 1812, por una libertad que instintivamente perseguíamos, por un innato anhelo de repeler tutelas que nos inspiraba un heroísmo que solía rayar en barbarismo, jamás nos habíamos visto reducidos á tan extrema y desesperante situación.

Porque otras veces, al menos, teníamos por delante, en nuestra vida nómada de perseguidos, el inmenso espacio del desierto, rodeados por el ambiente libre del camino que trillabamos llevando, desplegada á las auras puras del terruño, el pendon de nuestras intangibles esperanzas de dignidad y autonomía.

Pero ahora, les decir, en aquel entonces, nos asfixiábamos entre el mar, bloqueados por ese lado por las naves enemigas y, por el otro, á simple vista, tan reducido era el espacio, por los campamentos del tirano que había ido invadiendo, aniquilando los elementos con que nos oponíamos á la invasión y á la conquista, al extremo que no quedaba ya un sólo hombre en pié que resistiera su sangriento dominio, desde las cuevas blanquecinas de los Andes hasta el márgen de nuestros ríos caudalosos, desde la Pampa infinita á las fronteras del Brasil.

Exhaustos, famélicos, indigentes de pan y de pólvora, resistíamos, sin embargo, siempre, á la sombra de una bandera que no sólo era el pendón de Artigas y el de los 33 sinó que era, á la vez, la enseña de la libertad y de la civilización de la más vasta y hermosa región de América.

Y, sabiéndonos exhaustos y famélicos, el tirano y sus seides, sabiéndonos exhaustos, famélicos y desamparados, —pues la Inglaterra y la Francia, menos tenaces y resistentes que los defensores de Montevideo, habían abandonado su santa causa, neutralizados, vencidos por Rozas, incontestablemente omnipotente, desde entonces,—el tirano y sus seides, testigos de aquella agonía que se ultimaba, nos acechaban anhelosos, descontaban ya el instante en que se undirían en el abismo de un destino cruel é inexorable, aquellos restos, casi exánimes de la libertad de un pueblo desdichado.

Aquel defensor de la plaza sitiada, «in extremis», que ocupara un sitio de honor y sacrificio dentro de sus improvisadas y débiles trincheras, después de haber denunciado, airadamente, años atrás, esgrimiendo la pluma varonil del periodista, la trama infernal que se urdía desde el extranjero, con la complicidad de un presidente oriental, arrostrando sus iras, sufriendo las penalidades del destierro, para surgir, después, con la espada en la mano, en los campos de batalla, donde con buena ó mala fortuna, se colocara frente á frente á Rozas y á Oribe, confabulados para una obra de absorción y aniquilamiento nacional,—aquel defensor de Montevideo, que había re-

suelto consagrar su vida entera á derribar á Rozas, salvando, á la vez, con la integridad territorial, la dignidad, las prerrogativas y la altivez de su patria, había aceptado aquella misión árdua por excelencia, tan inciertos y problemáticos eran sus resultados, con la fé que confortaba y animaba á los que pugnaban por el triunfo de sacrosantos ideales, encerrados dentro de los muros de la Troya Moderna.

Y llegó á su destino, y esa llegada fué una desesperación y un desencanto, porque encontró que, también allá Rozas imperaba, Rozas mandaba, ó poco menos; y así es como las autoridades imperiales se negaron á recibir, á reconocer, en su carácter, al emisario de aquel baluarte derruido que se levantaba en la embocadura del Plata, donde flameaba una bandera, acribillada de balas, cuya rendición se aguardaba allí, en el Brasil, por momentos.

La amargura de aquel emisario era profunda, y su angustia tanto más natural y justificada, ante el desastre inminente, cuando él sabía todo cuanto peligraba, todo cuanto sucumbía dentro del arca santa que había contribuido, hasta entonces, á defender contra inauditas asechanzas.

Y aumentaban su desesperación y desaliento, los ecos que de lejos le llegaban de las ilusiones, fundadas en la misión que se le confiara, con que se alimentaban moralmente aquellos náufragos del derecho y de la libertad, encerrados en los estrechos límites de la ciudad sitiada, desde que mucho temía que fracasarían sus desesperados y postrimeros esfuerzos.

Poco antes que el puñal de Cabrera partiera el corazón de Florencio Varela, el insigne ciudadano le escribiera, con fecha 28 de Febrero de 1848, «Lamas, Vd. es nuestra última esperanza.»

Lamas no tardó en reaccionar contra una debilidad momentánea, tal era el temple de los hombres que desde diez años atrás se debatían contra la supremacía del tirano.

No podía abandonar la partida.

Y no la abandonó.

Y desde que se encontraba allí, en el Brasil, con Rozas triunfante, dominante, allí lo combatiría, allí lo vencería, como lo combatió y lo venció, salvando, finalmente á la patria de las garras del tirano, con la integridad de sus fronteras y la plenitud de sus derechos, prerrogativas y altiveces de nación libre é independiente.

Tal fué su obra, pese á quien pese, á la luz de los hechos, que en vano se han pretendido tergiversar y desnaturalizar, imponiéndose á la justicia de una posteridad que se vislumbra ya, triunfante en medio de una penumbra que se disipa, poco á poco, para permitir que la historia reivindique sus derechos, más para gloria de la patria misma, al trazar las angustiosas evoluciones de su constitución, que para el renombre de uno de sus más constantes y fieles servidores.

---

No ha mucho, se ha dicho y repetido, tal es la escasa difusión, entre nosotros, de las nociones de nuestra historia internacional, tal la confusión producida en el ánimo público por prédicas insidiosas, inspiradas, generalmente por móviles de partido, originadas por odios y malquerencias, cuyos autores no han trepidado en ocultar hechos y adulterar circunstancias, para satisfacer sus pasiones—se ha dicho y repetido que el ilustre Barón de Río Branco había iniciado, como director de las relaciones exteriores del Brasil, una nueva, liberal y desinteresada política en el Río de la Plata.

Esa aserción no tiene fundamento y, al levantarla, no pretendo disminuir en lo más mínimo los merecimientos de ese hombre público ni desconocer la justicia con que, especialmente con motivo de su fallecimiento, pues no carece de títulos para ello, lo han ovacionado en nuestro país; pero es que, al atribuir al renombrado Barón la iniciación y planteamiento de una política internacional nueva, altruista y desprendida en relación á esta parte de América, no solamente se incurre en un error de hecho sinó que se comete una flagrante injusticia con los eminentes hombres de Estado del Brasil que, reaccionando contra prácticas anteriores, adoptaron una «gran política», relativamente á nuestros países, política que se incubaba desde 1848, en Río de Janeiro, que se exteriorizó en 1851 con las firmas de los tratados cuyo primer corolario fué la trascendental batalla de Caseros, con inmensas proyecciones para la libertad y riqueza de estas tierras, política á la cual el Imperio, y después la República brasilera, se mostraron consecuentes, sin desviarse de sus grandes líneas ninguno de sus cancilleres, en el número de los cuales se cuenta el Barón de Río Branco, como se cuenta su ilustre padre, el Visconde del mismo nombre.

Para ser justos, para ser verídicos debiéramos atribuir,

por parte del Brasil, ante todo, al Señor Don Pedro 2º el honor de la adopción de una nueva orientación en sus relaciones con los pueblos del Atlántico americano.

El gabinete imperial se rehusó, en 1848, á recibir al Dr. Lamas como representante de la soberanía oriental, y si así procedía, era porque el General Guido, ministro entonces de Rozas, en el Brasil sostenía, y aquel gabinete lo admitía, que el gobierno del Cerrito era el único legal; y cuando, ante la insistencia y demostraciones del emisario de Montevideo, aquel gabinete, en un momento dado, pareció titubear en su actitud al respecto, el plenipotenciario argentino declaró que su gobierno hacía cuestión de buenas relaciones con el Brasil del rechazo de los poderes de dicho emisario.

El Brasil no quería provocar una nueva guerra con la Argentina, sobre todo contra Rozas, cuyos ejércitos habían salido vencedores de todas las contiendas y cuyo poder parecía incontrastable en todas las regiones del sud, y el resultado fué que el gabinete imperial no recibió á Lamas, ni en 1848, ni en 1849, continuando á cultivar las más cordiales relaciones con el portavoz oficial y privado del tirano ante la corte imperial.

Entretanto el enviado de la Defensa no permaneció ocioso; se introdujo en la vida social y política del Brasil, estrechando relaciones con los principales hombres públicos, disertando, casi á diario, desde las columnas del «Jornal do Comercio», exponiendo cuál era el sistema de Rozas, cuales sus propósitos, cuales los peligros de la consolidación de un poder que, una vez enseñoreado de la plaza de Montevideo, ya no tendría límites ni correctivos posibles, lo que, día más ó menos, lo llevaría, necesariamente, al Brasil á la guerra, sin aliados ni puntos de apoyo en la región platense.

Pero si no había sido recibido oficialmente, Lamas había logrado hacer camino en la opinión, conquistando adictos á su política y logrando, por fin, ponerse al habla con el entonces joven Monarca, cuyo espíritu impresionó, al extremo que se convenció de que era indispensable que Montevideo no sucumbiera, mientras se estudiaba más profundamente el problema; y así fué como Montevideo empezó á ser socorrido por parte de prestamistas particulares, una vez que estos se dieron cuenta de que el soberano se inclinaba á una intervención eficaz, que no tardaría en producirse.

Y si el Emperador tendía, en efecto, á ese resultado era porque había sido cautivado por la exposición que le hiciera el emisario de la Defensa, de una nueva política, de una gran política, que tuviera por base, en el propio interés de los dos grandes vecinos, la real independencia y creciente prosperidad del Estado uruguayo, política leal, de buena fé, desprendida, contrariamente á la que en realidad se había seguido desde tiempo inmemorial.

Lamas fué, por fin, oficialmente recibido, rompiendo el Brasil con Rozas, cuyo ministro pidió y á quién se le dieron sus pasaportes, actitud adoptada una vez que se contó con el concurso de Urquiza, concurso que sólo se obtuvo mediante la seguridad de que el Brasil entraba de lleno en la combinación, asumiendo las responsabilidades consiguientes, corriendo las contingencias inherentes.

Tal fué, en cuatro palabras, el histórico de aquella evolución radical en la actitud del Brasil que dió por resultado, con la adopción de una nueva política, leal y desprendida, la caída, en primer término, del poder de Rozas, que parecía inconmovible, abriéndose al Río de la Plata nuevos horizontes de expansión y progreso; y como prueba tangible, innegable de que se trataba, en realidad, de una nueva política, de una gran política, estaba el hecho de que el Brasil, al acordar su decisivo contingente al triunfo de los principios liberales en el Uruguay y en la Argentina, librándolos de la sangrienta y deprimente dominación de Rozas, no exigió retribución alguna, en forma y bajo título alguno, y esto que, existían precedentes que justificaban la persuasión de que el gobierno oriental se sometería á los más crueles sacrificios nacionales, con tal de salvar lo que podía salvarse aún de la nacionalidad que sucumbía...

No es mi propósito agotar argumentos y acumular comprobaciones que no caben en el programa de estas breves páginas, pero caben en ellas los siguientes párrafos que desprendo de un memorándum dirigido al gobierno de Montevideo, en Febrero de 1852, días antes de Caseros, por el representante imperial, Señor Hermeto Carneiro Lcao, más tarde Marqués de Paraná, referente á los tratados del 51.

«Por pequeño que sea el espíritu de rectitud é imparcialidad con que se entre en el exámen de esos Tratados, no se podrá desconocer que ellos están basados en principios sanos, que respetan y consolidan, de la manera más

ventajosa los derechos é intereses recíprocos de los dos países.

«S. M. el Emperador del Brasil debería juzgarse acreedor á la gratitud del Estado Oriental cuando, habiéndolo auxiliado poderosamente para recuperar la independencia anulada por tantos años, no se prevaleciese de las circunstancias apuradas del dicho Estado para exigir convenciones ó privilegios que lo acusasen.

«El Tratado de Comercio, no hace más que poner al Brasil á la par de las Naciones más favorecidas, y la única excepción de derechos que le fué concedida en favor de la exportación del ganado en pié, está más que compensaba por igual excepción concedida por el Brasil, siendo equiparados á iguales géneros de producción Nacional el charque y demás productos de ganados que fueren importados en el Imperio transitando por su frontera.

«El tratado de Límites, toma por base el «uti-posidetis», que es mantenido con muy insignificante alteración. Esa base, á más de tener su fundamento en el Tratado de 27 de Agosto de 1828, que reconoció y estableció la independencia del Estado Oriental, es la menos contestable y la más equitativa y regular; y como tal fué ha poco admitida por la República del Perú que no debe al Imperio la cooperación y auxilios que este ha prestado al Estado Oriental.

«Los Tratados de alianza y subsidio no contienen sino cargos para el Brasil, favores y beneficios para el Estado Oriental.

«Sólo el deseo de mantener la paz de ese Estado, de poner término á la anarquía y conmociones en que él ha vivido desde su primera Presidencia, y que tantos perjuicios ha causado á los súbditos brasileros y obligado al Imperio á conservar fuerzas extraordinarias en la Provincia de Río Grande del Sud, podían inducir á S. M. el Emperador del Brasil á hacer tantos sacrificios, á aceptar tan enormes cargos».

. . . . .

El Dr. Andrés Lamas, en el manifiesto que dirigió á sus compatriotas en 1855, expuso la significación y alcance de los tratados del 51, así como explicó en qué consistía la nueva orientación política del Brasil, que ellos inauguraban en el Río de la Plata. De sus páginas recortamos los siguientes párrafos:

«...Digamos, ante todo, cuál és el pensamiento político

representado por la alianza del Imperio del Brasil con la República Oriental del Uruguay.

«Este pensamiento, revelado por todos los documentos internacionales de esa alianza, fué leal y claramente explicado y comentado por los más eminentes estadistas del Brasil.

«El Sr. Paulino José Soares de Souza, hoy Visconde del Uruguay, en la sesión de 26 de Septiembre de 1853, después de historiar ligeramente la política y las luchas del Brasil sobre el territorio que hoy forma la República Oriental, decía: «La ocupación hecha en 1817, no fué un remedio. La incorporación, no lo fué tampoco. ¿Cuál era, pues, el remedio, cuál era la política que convenía adoptar? Era concurrir para la pacificación de aquel Estado; concurrir para el establecimiento y el mantenimiento de un gobierno legal; ayudarlo á levantarse, á reorganizar su hacienda, á consolidar el orden y su independencia, á hacer desaparecer, con algunos años de paz, la influencia de los caudillos. Era esto cortar el mal por la raíz. Fué esta la política de los tratados de 12 de Octubre de 1851.»

«El ilustre Visconde, hoy Marqués de Paraná, y el señor Limpo de Abreu, hoy Visconde de Abaeté, confirmaron de la manera más explícita, el pensamiento de la alianza explicado en los párrafos que acabamos de copiar por el ilustre ministro que la fundó.

«El Sr. Marqués de Paraná, agregaba, dirigiéndose á los opositores de la alianza: «¿No queréis la gloria del Brasil?, ¿no queréis la importancia externa del Brasil?, pues hay gloria é importancia para el Brasil en impedir la disolución del Estado Oriental, en salvar y fortalecer la pacificación y la nacionalidad de ese Estado.»

. . . . . : : : :

La gran política, como se vé, no es de hoy.

No hay tal nueva y reciente política del Brasil en el Plata.

Lo que hay es que el Barón de Río Branco fué un continuador convencido de la política del 51, un ejecutor fiel de esa política.

Y él hubiera sido el primero en no pretender usurpar una gloria que, en cuanto al Brasil, corresponde en primer término á Don Pedro 2º, á quién el Río de la Plata le debe, á él, sí, como á los grandes ministros que secundaron su política, un recuerdo imperecedero.

Y antes de cerrar este capítulo, observaré que hay error en algo en que se ha venido incurriendo, recientemente, en nuestras esferas políticas, á saber: que en el Brasil hay una política internacional del Imperio y una política internacional de la República; no hay tal; lo que hay en el Brasil es, relativamente á sus relaciones exteriores, una política tradicional, consecuente, perseverante, lógica; de ahí su fuerza y su eficacia, su incontestable superioridad y prestigio. Y en cuanto á las grandes líneas de su política relativamente al Río de la Plata, ella arranca de los tratados de 1851, época en que el Brasil, reaccionando contra procedimientos anteriores, abandonando ideas de absorciones y hegemonías, se inspiró en las vistas y propósitos que expuso y acaba de leerse, en 1853, en el Senado brasileiro, el ilustre Visconde del Uruguay.

---

Los que, entre nosotros, se muestran más écuánimes y justicieros al referirse á los tratados del 51, «reconocen» que ellos constituyeron un «sacrificio necesario» impuesto por las circunstancias; y esa actitud, aparentemente benévola, es hija tan sólo de la ignorancia de la realidad de los hechos, efecto de una atmósfera viciada por una propaganda que, extraviando la opinión, ha hecho con que, más de una vez, haya dañado ó comprometido seriamente intereses esenciales del país, haciendo peligrar una base política que constituye, aún hoy, una preciosa garantía de nuestros derechos de nación.

Y bien, no se consumó «sacrificio» alguno,—esa es la verdad, esa es la realidad,—con aquellos tratados, ni en cuanto á límites, ni á ventajas comerciales de que ya gozáramos, ni á prerrogativas soberanas, ni á intereses materiales, ni á amor propio, ni á altiveces de pueblo viril, como es el nuestro.

Como lo dijo el ministro del Brasil en Montevideo, en Febrero del 52, Sr. Carneiro Leao, después Marqués de Paraná, en aquellos tratados, todo fué en favor del Uruguay; en efecto, aparte las demás ventajas comerciales y financieras, no perdió nuestro país ni «una lonja» de territorio, según la frase del Sr. Setembrino E. Pereda, «respetándose las fronteras que veníamos disfrutando desde luengos años»; y aunque el citado y distinguido escritor, á quién el país debe importantes trabajos que serán, sin duda, un día, utilizados para la solución de otros problemas, se refiere á los límites del año 28, de acuer-

do con los del año 21, el hecho es que no fueron alterados esos límites, por el tratado respectivo del 51, sobre todo después que el Dr. Lamas obtuviera, como obtuvo, del gobierno imperial, en Marzo de 1852, ciertas modificaciones relativas á la frontera del Chuy y á las dos medias leguas cedidas en las embocaduras del Cebollati y del Tacuarí, tales como se consignaron en el tratado firmado en Montevideo el 15 de Mayo de aquel año.

Y al decir que nuestro país no perdió «ni una lonja de territorio», me mantengo en la verdad extricta, irrecusable, 1º desde que se confirmaban los límites del tratado preliminar del año 28, pues al declarar libre é independiente el Estado Cisplatino, era subentendido que regían sus contornos geográficos, minuciosamente relacionados en el acta de incorporación del año 21, firmada por orientales y portugueses y, 2º desde que la reivindicación de las fronteras del tratado de San Ildefonso, de 1777,— por otra parte modificado en favor de Portugal por el de Badajoz de 1801 no pasaba, al menos para nosotros, de una pretensión sin consistencia legal ni posibilidad material, lo que equivale á decir que si implícitamente el tratado del 51 renunciaba derechos anteriores, esos derechos eran absolutamente platónicos, materialmente ilusorios.

Queda á salvo, en lo que vá dicho, lo referente á las aguas fronterizas del río Yaguarón y de la Laguna Merín, materia que abordaré en seguida, pero pudiendo anticipar desde luego, respecto á ese asunto, que no se modificó, tampoco, por aquel tratado, hecho alguno preexistente y que, por el contrario, quedó abierta la puerta para que conquistáramos, en aquella zona fronteriza, algo que nunca habíamos poseído, semilla que germinó, á través de detenidos debates diplomáticos, acabando por dar su apetecido fruto.

Así, pues, no es siquiera controvertible que los tratados del 51, á la vez que salvaron á la patria de la absorción,— no pudiendo nadie contestar que sin la ayuda del Brasil, ocultamente primero, por medio de envío de armas, de víveres y de dinero y ostensiblemente después mediante la cooperación militar, la plaza de Montevideo, último baluarte que resistió al tirano hubiera acabado por caer bajo su implacable y sangriento dominio, hecho que hubiera significado la pérdida, quizá definitiva de nuestra zarandeada libertad.

Y á la par que era fatal que eso hubiera sucedido,

no resulta menos verídico é incontestable que tan grandes é inapreciables bienes, que impidieron aquel temido y anunciado desastre, los conquistamos sin sacrificio alguno.

Tal vez á eso, á la comprobación de tan magnos resultados, es que se debe que, Sarmiento, que estuvo en el Brasil en 1852, que examinó minuciosamente los archivos, que se entrevistó con el Emperador y conversó con los prohombres del Imperio, le escribiera á Mitre, desde Río, (carta publicada en su libro «Campana del Ejército Grande Aliado»): «Lamas ha llenado con esta misión el episodio más glorioso de la Defensa de Montevideo, á la vez que ha echado las bases de nuestra resurrección política»,— y concluía diciendo: «la historia de esta misión es un monumento.»

No recurro á estas citas, no exhumo estas comprobaciones para realzar una personalidad que, más que á sí misma, más que á los suyos, pertenece á la patria; pero no puedo prescindir de ellas para restablecer hechos históricos culminantes, para dejar en su lugar á los protagonistas de escenas tantas veces dolorosas, pero siempre gloriosas, para echar luz, toda la luz posible sobre episodios y acontecimientos que es indispensable que las generaciones que nos suceden puedan apreciar debidamente, juzgándolos con imparcialidad y justicia.

Es un error creer,—y es lamentable que se admita y proclame,—que se produzcan actos de generosidad y desprendimiento de pueblo á pueblo, de Estado á Estado igualmente soberanos é independientes.

Entre las naciones ó hay derechos ó hay mutualidad, coincidencia, reciprocidad de intereses; reclamar aquellos, combinar estos entre sí, es la misión de los gobiernos, el objeto de la diplomacia.

Por otra parte, es axiomático que no hay pacto duradero, y legítimo, pudiera agregarse, sin que sea útil y provechoso para todos los contratantes.

La filantropía entre las naciones, las dádivas, las generosidades entre ellas, si se producen, resultan siempre mentidas ó aparentes, descubriéndose siempre, al fin, un móvil interesado. Y, para el agraciado, este hecho, esta incógnita que se descubre ó revela redundá en su beneficio, desde que lo exonera de una gratitud que, hasta cierto punto, lo coloca en una situación de inferioridad ó dependencia.

Los auxilios, de diversa naturaleza, que nuestra República ha reclamado á veces del Brasil lo han sido siempre en el interés de nuestra paz, de nuestro orden administrativo, invocando nuestro gobierno ó sus representantes la propia conveniencia del país vecino de que no peligrara, por el desquicio y la anarquía, la existencia del Estado intermedio creado por la Convención preliminar del año 28.

Y á propósito de esa Convención preliminar, por la cual el Brasil «declaraba separado» de su territorio el Estado Cisplatino y la Argentina «concordaba en declarar», por su parte, la independencia de aquel Estado Cisplatino, ¿podía, acaso considerarse como un acto de desprendimiento en favor de los orientales? Por cierto que de ningún modo, desde que nuestros vecinos obraban por «mutua y recíproca conveniencia» de todos, de ellos porque reconocían que no lograrían adueñarse, ni uno ni otro, definitivamente, de nuestro territorio, y en cuanto á los orientales porque realizaban su ideal de autonomía.

Nadie tenía que agradecer á nadie.

Del mismo modo, cuando peligraba nuestra independencia, reducidos nuestros atributos de soberanía á la estrecha península de Montevideo, ¿acaso fuimos á solicitar del Imperio un acto de generosidad, un arranque de desprendimiento, un servicio eminente, de esos que obligan una eterna gratitud? No, por cierto: nuestro emisario hacia ver á la opinión, á la cual se dirigía desde las columnas periodísticas, y argumentaba al Gobierno y á sus ministros,—ahí están sus artículos del «Jornal do Comercio», sus notas diplomáticas, los Protocolos de las conferencias,—en el sentido de que si era un interés de los orientales la subsistencia de sus prerrogativas de nación, su paz, su prosperidad, la consolidación de su ser social y político, no era menos un interés del Imperio, interés casi vital que no pereziese el Estado intermedio, que no se malograra «la habilísima solución del año 28.»

Se lé en una de sus notas:

«La paz sólo fué realizable, y sólo es conservable, por la existencia de un Estado intermedio, independiente.

«Suprímase ese Estado, y la lucha reaparece, tan insoluble, tan funesta, como lo fué en sus épocas más sangrientas y más luctuosas.»

Ocioso sería extractar otros documentos de nuestra Legación en el Brasil, consecuentes todos en una actitud,

que nunca se desmintió, que no sacrificaba jamás nuestras susceptibilidades y altiveces, por muy apremiantes y angustiosas que fueran nuestras circunstancias.

Y cuando se trató de la navegación de las aguas fronterizas, al ministro oriental no se le ocurrió tampoco pedir una gracia, sino que argumentó, y así se reconoció por parte del Brasil, y así se consignó, que esa navegación era de «mútua conveniencia, de recíproca utilidad», precedente, compromiso que tuvo por corolario, á la larga, el tratado Domínguez—Río Branco; proyecciones de la política inaugurada con los tratados del 51.

Y no se diga que el pensamiento de ligar, en sus inspiraciones, en sus proyecciones, en su índole, el tratado reciente con los del 51, es una idea antojadiza; en efecto, al dar cuenta del tratado de Octubre de 1909, el «Jornal do Comercio», se expresa así: «nadie más que nuestro actual ministro de Relaciones Exteriores, ha dado pruebas de su respeto á nuestro honesto y brillante pasado, y á los estadistas de 1851,» recordando, en seguida, que «el ilustre brasileiro, Visconde del Uruguay, que dirigió las negociaciones de 1851, dió á comprender desde luego (como atenuante al «uti possidetis», esto es, al hecho que se reconocía), que más tarde el Brasil podría hacer concesiones al país vecino», cuyo obstáculo era entonces la turbulencia uruguaya y los temores de un ruinoso contrabando fronterizo.

Corriendo el tiempo, modificadas las condiciones de nuestras poblaciones linderas del Brasil, el mismo negociador uruguayo de los citados tratados, tratados que dieron por tierra con el poder de Rozas, que libertaron á nuestro territorio de la presencia de sus ejércitos, afianzando nuestra libertad é independencia, y esto sin sacrificio alguno de nuestra parte, sin imposición alguna que nos molestara ó deprimiera, obtuvo de parte del Imperio «el compromiso», irrevocable, de concedernos la libre navegación fronteriza, hecho que «quedaba únicamente dependiente de los estudios locales á que se iba á proceder sin demora, como á los Reglamentos consiguientes, los que se sujetarían á los principios más liberales», asunto que explayaré, habiendo adelantado lo que queda dicho para corroborar lo que afirmé al empezar este capítulo, á saber, que las naciones no obran por generosidad sino por mutua conveniencia, por recíproca utilidad, habiendo sido esta mutua conveniencia y utilidad de antemano reconocida por el Brasil, al «obligarse», en 1857, á franquear-

nos la navegación en común del Río Yaguarón y de la Laguna Merín.

Lamentaría, sinceramente, que se me pudiera atribuir el propósito de contrariar la corriente de expansiones generosas del pueblo uruguayo, favorables al Brasil, provocadas por la actitud del Barón de Río Branco, tanto más que nadie más que yo debía regocijarse, como efectivamente me he regocijado al ver cumplida una «promesa» de hace medio siglo y satisfecho un «compromiso» de ha cuarenta y cuatro años, por parte del Brasil, relativos á nuestras aguas fronterizas, cuando, á parte de ciudadano de la República, amante de su tierra como el que más, desciendo del diplomático que provocó aquella promesa y arrancó este compromiso, explícito y solemne al país vecino.

Pero es que arriba de esas consideraciones, dominando esos sentimientos, la verdad, la realidad se sobrepone. ¿Qué interés ha movido á la cancillería brasilera á escoger este momento para cumplir su promesa, para hacer honor á su compromiso?

¿Qué interés?, me preguntaba, pues soy incrédulo respecto á la generosidad, al desprendimiento de un Estado hácia otro Estado; porque si bien existiera aquella promesa, aquel compromiso, el Brasil hubiera podido aún prolongar la época en que realizaría lo que tenía que realizar, cuando cae bajo mis ojos el «Jornal do Commercio» de 6 de Noviembre de 1909 y leo en sus columnas lo que sigue, con relación á aquel acto:

«Debe reunirse en Río de Janeiro, una conferencia de jurisconsultos, delegados de todas las repúblicas americanas, con el objeto de redactar un código de derecho internacional público. En esa conferencia, «gracias al nuevo tratado, no quedará el Brasil en triste y vejatoria unidad,» cuando esos representantes de las repúblicas hermanas hubieren de votar el artículo ó los artículos relativos á fronteras fluviales y á la navegación y tránsito por los ríos internacionales. Nos hallaremos entonces perfectamente en regla con las ideas de nuestro tiempo y de nuestro continente, en todos los puntos de que la conferencia se ha de ocupar. Y es necesario tener presente que ninguno de los asuntos comprendidos en los vastos dominios del derecho internacional público, podrá en esa reunión ser apartado del debate y del voto».

¿Es esa la llave del enigma?

¿Era ese el interés del Brasil, el de «no aparecer

ante el mundo en triste y vejatoria unidad», gracias al tratado Domínguez-Río Branco, como dice el «Jornal», con motivo de la próxima reunión de aquella conferencia internacional? Si así es, como parece, mucho nos alegraríamos, pues si bien quedan en pié nuestras manifestaciones de simpatía hacia el Brasil, con motivo de ultimarse un acto, antes concertado, de mútua conveniencia internacional, destinado á estrechar más los vínculos, las solidaridades de ambas naciones, nos desligamos, en cierta medida, de una gratitud que se había exagerado, desde que, por confesión de parte, puede decirse, la cancillería de Itamaraty, aparte las recordadas obligaciones, tenía un interés especial en escoger esta época para dar satisfacción á una aspiración del pueblo amigo y vecino. 4

No era cómoda, por cierto, la situación del negociador oriental en la corte del Brasil, cuando hubo de abordar, en 1850, el tema de las aguas fronterizas. En efecto: el «hecho» estaba de su parte y, en cuanto al «derecho», ¡qué difícil alegato el nuestro!

El Dr. Lamas dejó escritas algunas páginas sobre esa situación. Fueron escritas, en su época, en Río de Janeiro.

Voy á reproducirlas:

«En 14 de Agosto de 1845, el General D. Manuel Oribe, expidió un decreto habilitando puertos en la Laguna Merin y en otros puntos fronterizos.

«La legación de la República en esta corte solicitó del Gobierno Imperial, que desconociese esa habilitación por ser hecha por poder incompetente y, con ese motivo aventuró la idea de la comunidad de aquellas aguas.

«El Gobierno Imperial rehusó, en efecto, reconocer los puertos habilitados por el Señor General Oribe, pero lo rehusó fundado en que «las aguas y todos los puertos de la Laguna le pertenecían exclusivamente al Brasil».

«Copiaré algunos §§ de la nota dirigida por el Señor Limpo de Abreu, (ahora Visconde de Abaeté) Ministro de los negocios extranjeros, al Señor D. Francisco Magariños, plenipotenciario de la República, en 17 de Enero de 1846.

«Dicen así:

«Le cabe, sin embargo, al abajo firmado, observar «y declarar «muy positivamente» al Sr. Magariños, que el «Gobierno Imperial, «no reconoce en el Estado Oriental «propiedad ni cualquier otro derecho de los puertos de

«la laguna Merim, pues, que todos sin excepción pertenecen al Imperio» por derecho internacional y, por consecuencia, no existe comunidad alguna de aguas en la laguna Merim, ni en ella puede darse la hipótesis figurada en la citada nota del Señor Magariños. Fué por estas consideraciones tan obvias como incontestables que el gobierno imperial declaró que «sólo en embarcaciones nacionales ((brasileras), podían ser importados productos orientales en el Río Grande por los ríos y aguas interiores. El gobierno imperial, tomando en la debida atención el decreto de 14 de Agosto último por el cual el General Oribe habilitó algunos puertos en la laguna Merim y en la frontera del Chuy, «para lo que ninguna autoridad tiene, como tampoco la tiene el Estado Oriental, se opondrá por todos los medios, á que se dé ejecución á las medidas para ese fin adoptadas con mengua de los derechos del Imperio» (Relatorio de los Negocios Extranjeros, de 1846)).

«Ante esta declaración, tan expresa, del Gobierno Imperial, que hacía un «casus belli» de la ejecución de la habilitación de los puertos de la laguna Merim y de la frontera del Chuy, que declaraba comprendido en el territorio brasiler, el Gobierno de la Defensa de Montevideo y el Señor General Oribe se resignaron, no resguardaron siquiera, por las protestas de estilo, los derechos de la República.

«Ese era el hecho materialmente existente, diplomáticamente establecido, al celebrarse los tratados de 1851.

«Todos recuerdan cual era la posición en que estos tratados iban á ser celebrados.

«Raya en locura imaginar que en tal posición pudiéramos reivindicar ni conquistar.

«Inmenso era, en aquellas circunstancias, salvar lo que teníamos, rechazando la base, que se nos presentó, de los límites de 1819.

«Conseguimos, en general, todo lo más que racionalmente podíamos pretender,—el «uti possidetis.»

«Quedó, pues, la navegación de la laguna Merim y del Río Yaguaron, «tal como estaba, tal como había existido desde que habíamos sido Estado independiente.»

«El tratado de 12 de Octubre de 1851, «no innovó nada; reconoció, simplemente, el hecho existente, respetado y tolerado por todos los gobiernos patrios.»

«Esta es la verdad.

«Dolíame ese hecho; y al reconocer lo que los gobiernos

patrios habían tolerado ó autorizado, contraje conmigo mismo el compromiso de modificar, si no podía destruir, aquel hecho, en el interés bien entendido de los dos países.

«Los siguientes párrafos de la «Memoria que presenté al Gobierno Imperial» en 25 de Octubre de 1854, explican lo que hize y lo que conseguí en ese sentido:

«Los arreglos territoriales y comerciales de 1851 no satisficieron acabadamente el que debía ser, y era, en el fondo, el objeto trascendental de semejantes arreglos.

«Aceptándolos la Legación Oriental como «necesidad «inexorable» de su país en la situación y en el momento «en que se celebraban, los aceptaba con la esperanza de «que el tiempo, los sucesos, las dificultades que debían «surgir de esos mismos arreglos, hubiera de producir «modificaciones sucesivas.

«Las del arreglo de límites, se hicieron sentir inmediatamente; pero la esperanza de la Legación Oriental no «fué defraudada, pues que «ella obtuvo», en Marzo de «1852 del Exmo. Sr. Paulino José Soárez de Souza las «modificaciones relativas á la frontera del Chuy y á las «dos medias leguas cedidas en las embocaduras del Ce- «bollati y del Tacuarí, tales como se consignaron en el trata- «do firmado en Montevideo el 15 de Mayo de aquel año, «y «además» la «promesa» de la navegación «en comun» «de la Laguna Merin, con sujeción á los reglamentos res- «pectivos,—concesión, esta, que no fué consignada en el «dicho tratado de 15 de Mayo, apesar de haber sido «oportunamente comunicada por la Legación Oriental, pero «con la cual ha contado y cuenta el Gobierno de la «República.»

«El mismo tratado que reconoció el «hecho» de la navegación exclusiva del Brasil, tal como existía, tal como había existido desde 1801, aseguraba, sin embargo, ciertas franquicias que hacían prácticamente tolerable el monopolio de la navegación para la bandera del Brasil.

«Vino, en seguida, la «promesa» de la navegación en común, como acaba de verse, la que era ya el quebrantamiento de la inexorable intransigencia de la nota dirigida, en 1845, al ministro Magariños.»

. . . . .

Corroborando el hecho de la mencionada «promesa», el Protocolo de la conferencia N<sup>o</sup> 6 de la negociación del Tratado que se firmó el 4 de Septiembre de 1857,

contiene, á este respecto, declaraciones expresas por parte del plenipotenciario del Imperio.

En efecto, en el curso de esa conferencia, recordó el ilustre Visconde del Uruguay, «que el representante brasileiro ante el Gobierno de Montevideo, Sr. Marqués de Paraná, había dicho, en nota de 31 de Diciembre de 1851, que la exclusividad tradicional y reconocida como existente por el tratado de límites, no debía entenderse como una negativa absoluta por parte del Brasil á la concesión de la navegación en común, pues que subsistía la declaración hecha por el Ministro Secretario de los Negocios Extranjeros del Imperio, en nota dirigida al Ministro Oriental D. Andrés Lamas, de que el exclusivo de las aguas de la laguna Merin, no lo imposibilitaba para admitir, por medio de concesiones especiales, las embarcaciones orientales á hacer el comercio en los puertos de la misma laguna,—habiendo agregado el Visconde del Uruguay, que el Gobierno Imperial estaba todavía en las mismas ideas.»

---

El Dr. Lamas, que «había contraído consigo mismo el compromiso», como lo escribía, y se ha visto, en 1851, de modificar la situación que se le había hecho á la República en las aguas fronterizas, debía continuar sus esfuerzos con ahinco, tenacidad y patriotismo.

A raíz mismo de los tratados del 51, había obtenido la «promesa» de que esa situación se modificaría, en el sentido de la navegación común de aquellas aguas, y esto después de haber conseguido, yá en 1851, un cierto «modus vivendi», que hacía menos intolerable la exclusividad, tan inexorable y absoluta como la sostenía el Brasil en la nota de 1845, dirigida al Sr. Magariños, su antecesor en Río.

Pero aquella promesa, que era, yá, un quebrantamiento de la intransigencia, debía seguirse del convencimiento, que el Dr. Lamas iba inoculando en el espíritu de los grandes estadistas del Imperio, de que la navegación común, era, también, un interés del Brasil.

No se pueden dar mis compatriotas una idea de la labor, de años, por parte del negociador oriental que dió por resultado que el Brasil se convenciera, que el Brasil reconociera, que el Brasil consignára, en un tratado solemne, firmado y ratificado, que la navegación en común de

aquellas aguas era «de mútua conveniencia, de recíproca utilidad.»

Para darse de ello una idea, hubiera sido necesario que tuvieran á la vista, como los tengo yo, el sinnúmero de escritos, de papeles, de argumentos, de reflexiones, de comprobaciones relativas á ese asunto, esfuerzos persuasivos de diverso orden, pues, á la vez que encaraba el asunto desde el punto de vista comercial, económico, de las ventajas de un intercambio libre por medio del transporte, bajo ambas banderas, sin restricciones odiosas y vejatorias, que coartaban el movimiento de gentes y productos entre las riberas de los dos países, el Dr. Lamas consideraba el problema desde una faz de alta política, argumentando con la necesidad de eliminar un obstáculo que venía dificultando la definitiva fraternización de nuestros pueblos, de ir borrando, poco á poco, eficazmente una tradición secular de odios, de antagonismos, de resentimientos.

Y, por fin, aquel diplomático consiguió su objeto.

Oigámoslo, en la nota de remisión, á su Gobierno, del tratado del 57:

«...Las estipulaciones relativas á la navegación de la laguna Merin y del Río Yaguarón, fueron materia, no solo de tormentosas discusiones y de serias dificultades, sino de verdaderos conflictos.

«Más de una vez, ellas pusieron en peligro la negociación entera. Los artículos, tales como hoy se encuentran en el Tratado, fueron conquistados palabra por palabra.

«Bajo el punto de vista brasileiro», la concesión era de suyo grave; y razón tenían para aplazar «toda promesa» teniendo por caducadas las anteriores, hasta que se consolidase, firmemente, la paz, un orden regular y una política benévola en la República.

«En ese aplazamiento estaba firme el plenipotenciario brasileiro.

«Empleé, para combatirlo, todos mis recursos; y, por último, hice de la concesión cuestión decisiva de política internacional.

«Esta cuestión, sometida á la resolución directa del Gobierno de S. M., produjo la adopción de los artículos 13 y 14 del Tratado.

«Por el Art. 13, el Brasil «reconoce», en principio, «la mutua conveniencia» para el comercio, la industria y las benévolas relaciones de los dos países, de abrir, por

concesión, la navegación de la laguna Merin y del Yaguarón á la bandera de la República.

«Por el Art. 14, se nos conceden, desde luego, los principales beneficios prácticos de la navegación, de que estábamos privados.

«Con las concesiones inmediatas y prácticas del Art. 14 desaparecen los más graves perjuicios que nos infería la navegación exclusiva del Brasil en la laguna Merin y en el río Yaguarón.

«Esto era lo esencialmente práctico en el momento, y eso ahí está.»

. . . . .

Desde que el convenio comercial de que se trataba constituía, por así decir, un ensayo, pues su duración obligatoria no pasaba de cuatro años, pudiendo continuar en vigencia ó ser denunciado por cualquiera de las partes, vencido dicho plazo, el plenipotenciario oriental obtuvo que las cláusulas relativas á las aguas fronterizas «subsistirían» al Tratado, pues, por su naturaleza, eran «permanentes é irrevocables».

Para mayor claridad, para permitir que mis conciudadanos se formen un juicio cabal sobre la trascendencia é importancia del triunfo diplomático que estoy relacionando, por medio del extracto y transcripción de los documentos más culminantes, conviene que traiga á la memoria, en sus párrafos principales, en lo que hace á las aguas fronterizas, tanto los informes de las comisiones de nuestras cámaras legislativas, las notas interpretativas, cambiadas entre la Legación y el Gobierno Imperial, como las palabras y constancias con que la cancillería brasilera dió cuenta de la firma del Tratado de 1857 al Parlamento Imperial.

«...Este tratado, decía la Comisión de la Cámara de representantes del Uruguay, al producir su informe sobre el Tratado, puede y debe ser la base y el principio de una política completamente nueva entre el Brasil y la República, de una política que, por eso mismo que se cifra en recíprocas ventajas, será la más sólida garantía de la lealtad para ambos, tanto en el presente como en el porvenir.

«...La pérdida absoluta de nuestros derechos, sea como sea, á la comunidad de las aguas fronterizas, se había convertido, por desgracia, en un «hecho consumado».

«Para deshacer ese «hecho», que para el Brasil se convir-

tió en «derecho», sería necesario que pudiéramos dominar aquellas aguas con una poderosa escuadra...

«...Los derechos que se reconocen por el Tratado á nuestra bandera nacional, no pueden dejar en convertirse en un hecho completamente efectivo.

«A este respecto, el plenipotenciario oriental, al declarar la inteligencia que por parte del Gobierno de la República se sometería á la aprobación de la Asamblea Legislativa, quedó establecido:

«Que la concesión hecha «en principio» por el Art. 13 del Tratado, «es por su naturaleza permanente é irrevocable.»

«Que ella, modificando sustancialmente, «destruyendo el hecho» existente antes de 1851, restablece el «principio» de la comunidad natural de aquellas aguas.

«Que la práctica de este principio no puede ser sujeta á ninguna condición de que resulte inexecutable ó ilusoria.

«Y, por consecuencia, que los reglamentos con que, de acuerdo con el Art. 13 del Tratado, se abrirán aquellas aguas á la bandera oriental, tendrán por base los principios hoy universalmente reconocidos y aplicados por los pueblos civilizados, esto es, los principios adoptados «para la navegación entre ribereños» después del Congreso de Viena de 1815, y que quedan admitidos entre la República y el Imperio.»

Y concluía la Comisión de la Cámara de representantes por aconsejar la aprobación del Tratado, como se verificó.

Esa comisión era compuesta de los diputados Caravia, Juanicó, Echenique, Tapia, Iturriaga, Pagola, Molina y Haedo.

El Senado se pronunció en igual sentido. En el informe del Sr. Ambrosio Velasco, se lé lo que sigue:

«...Hoy se reconoce á la República el derecho á la navegación en común de las aguas limítrofes con el Imperio; no podría negar aprobación á un tratado que contiene estas estipulaciones, sin traicionar mi conciencia y los intereses de mi país.

«Bajo este punto de vista, el Tratado hace grande honor á los Gobiernos que lo celebraron y á sus respectivos plenipotenciarios.»

. . . . .

El plenipotenciario oriental había tenido que realizar grandes esfuerzos á fin de dejar claramente establecido,

sobre todo, relativamente á la navegación en comun de las aguas fronterizas, que la concesión del Brasil á ese respecto, debía considerarse como «una concesión hecha», concesión que «sobreviviría al Tratado mismo en que se consignaba», teniendo ese tratado dos partes, una relativa al comercio ó cambio de productos entre los dos países y otra referente á las aguas de la laguna Merín y del río Yaguarón.

Por último, el Dr. Andrés Lamas, comprendiendo que era importantísimo que no subsistiera duda al respecto, dirigió una nota, con fecha 6 de Septiembre de 1858, al Ministro de los Negocios Extranjeros del Brasil, Señor Visconde de Maranguape, antes del canje de las ratificaciones, en la que textualmente se leía:

«...El infrascripto vá á hacer un postrer esfuerzo para traer el punto en cuestión á los términos más claros y más precisos.

«La apertura para la navegación, por la bandera oriental, de la laguna Merín y del Yaguarón, es una concesión «ya hecha», bona fide, por parte del Brasil.

«La «promesa» de 1851, reiterada en 1852, «fué reducida á estipulación» por el Art. 13 del tratado de 4 de Septiembre de 1857.

«Esta concesión es de la misma naturaleza de la que hizo la República á la bandera brasilera por el Art. 14 del tratado de 12 de Octubre de 1851.

«Tenemos, pues, fuera de duda, «la concesión hecha», y que esta concesión es de aquellas que sobreviven, por su naturaleza, al tratado temporario en que están consignadas.

«Faltan solo los reglamentos que deben hacer práctica la navegación oriental en las designadas aguas.

«Esos reglamentos deben ser el objeto de una negociación ulterior, que se llamó definitiva porque, en efecto, es por esos reglamentos que quedará definitivamente establecida la navegación práctica de la bandera oriental.

«Para esa negociación mandará el Gobierno Imperial estudiar y examinar las localidades.

«...Reconociendo, como reconoce, que la navegación de que se trata tiene únicamente por fin estrechar y desenvolver las relaciones comerciales entre el Estado Oriental y el Brasil, el infrascripto se persuade que queda en perfecto acuerdo con S. E. el Sr. Visconde de Maranguape.

«En consecuencia, si con arreglo á las explicaciones contenidas en esta nota, Su Exa. admite la inteligencia

asignada al mencionado Art. 13, base de la ratificación del tratado de 4 de Septiembre de 1857, el infrascripto está pronto á efectuar el canje de las ratificaciones y Su Exa. puede darlo también por realizado por parte de la República.»

He aquí, ahora, íntegra, la contestación á la nota precedente,—y la reproduco íntegra porque se trata de un documento decisivo, en el sentido de que, por el tratado del 57, aún después que fuera rescindido en su parte de intercambio, «quedaba hecha» la concesión á la navegación en común de las aguas fronterizas, cuya efectividad solo quedaba dependiente de estudios á que se iba á proceder, así como quedaba bien entendido que dicha concesión, ya hecha, era, por su naturaleza, «permanente é irrevocable.»

«Ministerio de los Negocios Extranjeros.

«Río de Janeiro, 10 de Septiembre de 1858

«El abajo firmado, del Consejo de Su Magestad el Emperador, Ministro Secretario de Estado para los Negocios Extranjeros, queda impuesto de las nuevas consideraciones que le dirigió por su nota de 6 del corriente Su Exa. el Sr. D. Andrés Lamas, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Oriental del Uruguay, sobre la inteligencia del Art. 13 del Tratado de Comercio y Navegación de 4 de Septiembre del año ppdo.

«En vista de la correspondencia cambiada entre este Ministerio y la Legación Oriental, y refiriéndose el abajo firmado á las declaraciones que ha hecho el Sr. Lamas, es cierto que el Gobierno Imperial tendrá en toda atención, en la ejecución de aquel Artículo, los pactos celebrados con la República, para la aplicación á la navegación de la laguna Merin y del Río Yaguarón, de los principios liberales que ha adoptado como base de su política fluvial, aplicándose á aquellas aguas tanto cuanto lo permitan la especialidad de esa navegación, su policía y fiscalización.

«No pareciéndole oportuno entrar en la apreciación individual, desde yá, de aquellos principios, se persuade desde yá el Gobierno Imperial, de que se puede proceder, sin más demora, al canje de las ratificaciones del tratado de 4 de Septiembre.

«El abajo firmado, reitera á Su Exa., el Sr. Lamas, las protestas de su perfecta estima y distinguida consideración.»

Ratificando una vez más la inteligencia y alcance del Art. 13 del Tratado, esto es, corroborando que era «una concesión hecha», la de la navegación en común de las aguas fronterizas, así como, 1º. que esa concesión era, por su naturaleza, «permanente é irrevocable», quiere decir, que siendo el Tratado de 4 de Septiembre de 1857 de «comercio y de navegación», aunque dejara de existir en la parte de «comercio», subsistiría irrevocablemente en la parte de «navegación» y, 2º. que la efectividad del uso de nuestra bandera en igual condición que la del Brasil en la laguna Merin, y en el Río Yaguarón, quedaba dependiente, «unicamente», del examen de los lugares y de la consiguiente reglamentación, que debía inspirarse en los principios más liberales,—ratificando y corroborando todo lo que al respecto quedaba clara é intergouvernablemente pactado, el entonces Secretario de Estado en los Negocios Extranjeros del Brasil, Sr. José María da Silva Paranhos, después Barón, y más tarde Visconde de Río Branco, dió circunstanciadamente cuenta al Parlamento brasileiro, en la Memoria ó Relatorio anual, con fecha 14 de Mayo de 1859, de toda la negociación, y sus resultados, concerniente á las aguas que, por el Norte, dividen á los dos países.

El ilustre Consejero Paranhos, concluía su exposición con estas palabras, refiriéndose á las notas cambiadas entre el Dr. Lamas y el Visconde de Maranguape que quedan reproducidas: «con estas explicaciones, terminó amigablemente la discusión», y agregaba, por último, lo que sigue:

«En 23 de Septiembre último, fueron canjeadas las ratificaciones del Tratado de 4 de Septiembre de 1857 y, en la forma de estilo, fué ese acto promulgado y mandado ejecutar por decreto Imperial N.º. 2269 de 2 de Octubre próximo pasado.

«Reconocido en principio que era de mútua conveniencia para el comercio, la industria y las benévolas relaciones de los dos países, franquear, por concesión especial del Brasil, la navegación de la laguna Merin y del Río Yaguarón á la bandera oriental, quedó la aplicación de ese principio, dependiente del examen y estudios locales, á que se debe proceder por parte del Imperio.

«Fiel á su promesa, y con el mejor deseo de realizarla, expidió el Gobierno Imperial, inmediatamente, las órdenes necesarias, para que se realicen los exámenes á que se refiere el Tratado, y cuyo fin es conocer las condiciones con que esa concesión puede efectuarse sin inconveniente y con utilidad recíproca.»

Tal fué aquel gran triunfo de nuestra diplomacia.

El Dr. Lamas había escrito, como yá lo he recordado, al analizar los tratados del 51: «dolíame aquel «hecho» (el de la exclusividad, por el Brasil, de la navegación de las aguas fronterizas), y al reconocer que todos los gobiernos patrios lo habían tolerado ó autorizado, contrahe, conmigo mismo, el compromiso de modificar, si no podía destruir aquel hecho, en el bien entendido interés de los dos países.»

Como se vé, consiguió su objeto, en todo lo que de él dependía, cumpliendo el compromiso que consigo mismo contrajera.

No debo pasar en silencio un hecho, —sobre todo porque no hay nada inconfesable en los actos de nuestra diplomacia de las épocas á que me vengo refiriendo, que son las que íntima y documentadamente conozco, — un hecho, repito, que, hasta cierto punto, se liga con el tratado de 1857.

Me refiero á lo que se llamó entonces, el tratado de «permuta» territorial, permuta que, en la explotación malévola que se hacía hasta de las palabras,—tal ha sido siempre el extravío producido por las pasiones y enconos de los partidos,—se presentaba como encubriendo una nueva «usurpación», por parte del Brasil, de una porción, que se hacía circular como enorme, de oído á oído, abultándose por momentos, como los huevos de la fábula, de lo que «nos quedaba» de territorio.

He aquí de lo que se trató.

Se lé en el preámbulo de ese tratado:

«Resultando de la demarcación práctica de los límites pactados entre el Imperio del Brasil y la República Oriental del Uruguay, que una parte de la línea divisoria, siguiendo los puntos culminantes, pasa de tal modo próxima á la villa brasilera de Santa Ana del Livramento, que corta sus dependencias, quebranta la unidad

de propiedades particulares y perjudica las comunicaciones dentro del territorio brasileiro, deseando los dos Gobiernos evitar, por medio de un acuerdo internacional, los conflictos y complicaciones que semejante estado de cosas puede originar, resolvieron proceder á dicho acuerdo, etc.

Y lo que se acordó, fué, textualmente:

«1º. La República, cede al Imperio, una área de terreno bastante para evitar los inconvenientes señalados en el preámbulo; 2º. El Imperio cederá á la República, una igual superficie de igual valor y condiciones en otro punto de la frontera; 3º. Los respectivos comisarios de límites escojerán, para la permuta, algún terreno en los que se den análogas circunstancias, etc.; 4º. El acuerdo de los comisarios, será sometido á los Gobiernos.»

En eso consistía ese tratado tan denigrado, cuyo texto no se divulgaba, pero que maliciosamente explotaban. ¡Miserias nuestras!

Nuestro gobierno aplazó la consideración de ese tratado, que ni tal nombre merecía, no pasando de un incidente de demarcación, como los que han sobrevenido, frecuentemente, en otros países, pues una cosa es trazar límites sobre el papel, al redactarse un tratado, y otro designarlos sobre el terreno.

Hace medio siglo, no tenía importancia alguna la villa que se formó con los suburbios de Santa Ana del Livramento, y poco nos hubiera costado retroceder la línea en unas cuantas cuadras, que de eso exclusivamente se trataba, recibiendo, en compensación, otra área equivalente que escogeríamos en el territorio brasileiro.

Y al hacerle el gusto al Brasil,—en el momento, en que nos cedía, gratuitamente, la anhelada navegación en las aguas fronterizas,—hubiéramos evitado los conflictos que se vinieron produciendo, que se preveían, resultado de dos poblaciones que se tocaban y que, propiamente se confundían.

El Gobierno Imperial se disgustó ante tan marcada malquerencia y fué causa, ese hecho, que, agregándose el desagrado producido en Río Grande por la ejecución, en su parte comercial, del tratado de 1857, este fuera denunciado por el Brasil.

Y es que, en nuestro país, en las épocas que recuerdo, se consideraba, generalmente, que el Brasil debía siempre hacernos concesiones y facilitarnos auxilios de toda

clase, sin que le retribuyéramos jamás su buena voluntad y condescendencias.

No soy solo yo quien lo diga; numerosos son los documentos en que los Gobiernos del Brasil se han quejado amargamente de esa actitud.

---

Cuando nuestro representante en el Brasil firmaba el tratado que he venido analizando, en su parte relativa á las aguas fronterizas, la República ardía en guerra civil...

«Lo he firmado, decía el Dr. Lamas á su gobierno, en nota de 10 de Septiembre de 1857, con profunda tristeza y desaliento.»

El temía que, una vez más, «el Tratado dé nuevo tema á las explotaciones que se hacen impunemente de estos actos, para aumentar y alimentar las agitaciones y las emociones públicas.»

No tardó aquel diplomático en abandonar á otras manos la dirección oficial de nuestros intereses en el Brasil.

Regresó al Río de la Plata y, deseando descansar, teniendo absolutamente necesidad de descansar, no se radicó en su país sinó en Buenos Aires.

En 1866, volvió con una nueva misión al Brasil. Ibamos á pelear, en unión con el Brasil y la Argentina, en los mortíferos esteros del Paraguay, por el principio de la común navegación de las aguas, mientras las nuestras, no obstante lo pactado y ratificado, permanecían bajo el exclusivo dominio del Brasil.

Reanudó las gestiones para que se hiciera efectiva «la concesión hecha», irrevocablemente, en 1857 y 1858, que había quedado pendiente, únicamente, como lo ratificaba el Ministro Paranhos al dirigirse al Parlamento, de exámenes locales.

Y, reñida una nueva batalla, firmó nuestro representante en Río, sirviéndole yó, entonces, de Secretario, en Enero de 1867, un nuevo tratado, que debía ser el definitivo, por el que, en ejecución de lo anteriormente convenido, obtenía nuestra bandera todo lo que había venido pretendiendo en las aguas fronterizas; y lo obtenía mediante una cesión «perpetua é irrevocable», por parte del Brasil, condición, esta, esencial, pues, toda cesión ó donación que no conste que es «irrevocable», es «revocable», en ciertas circunstancias, segun los principios generales del derecho, cuando esa cesión es á título gracioso, vale decir, cuando no tiene un fundamento oneroso.

Ese tratado, sin embargo, no fué ratificado por nuestro gobierno, no obstante que, por él, realizábamos nuestro ideal, en la forma más perfecta y acabada y de una manera perpétua, irrevocable.

Aunque la razón de ese acto hay que buscarla en miserias de partidos y en pequeñeces personales, que no deseo profundizar, un diario de Montevideo, recientemente, con motivo de ciertas consideraciones que me creí en el deber patriótico de exponer en nuestra prensa, en ocasión de la firma del último Tratado fronterizo, atribuyó aquella falta de aprobación á que, por el Art. 6º., se abrían las aguas del Tacuari y del Cebollati al comercio brasileiro y á que nos comprometíamos á dictar los reglamentos á la navegación del Río Negro, «en cumplimiento á las estipulaciones vigentes» entre el Uruguay y el Brasil.

¡Vaya una razón para haber rechazado aquel tratado!

¡Hacer extensiva al Tacuarí y al Cebollati, la libre navegación decretada ya antes, por el Uruguay, á otros de sus ríos interiores!

¡Pretender que, al propio tiempo que el Brasil abría sus aguas importantísimas, fronterizas, á nuestra bandera, permaneciesen cerradas á su comercio nuestras pequeñas arterias fluviales, que desembocan en aquellas aguas!

Y tratándose del Brasil, que se había honrado á sí mismo, honrando á la América, por su ley de 7 de Septiembre de 1866, que abría á la navegación de todos los pabellones el Amazonas, el Tocantins, el Tapajoz, el Madeira, el Negro, el San Francisco, etc., siguiendo el ejemplo, en el sentido de tan inteligente política, de los Estados Unidos y de tantos otros pueblos liberales y progresistas y dando lugar, dos años después, á la hermosa actitud del Perú, cuyo presidente, don José Balta, declaró abiertos todos los ríos de la República á la bandera mercante de todos los pueblos, fundándose en que «el desarrollo y engrandecimiento de un país no pueden conseguirse sin la libertad, que atrae la inmigración y el comercio del mundo».

No; la razón determinante de la negativa de ratificación del Tratado de 1867, fué otra, fué pequeña, fué mesquina, personal, partidaria.

Nadie creerá, hoy mismo, que el motivo fuera el invocado por el estimable é importante órgano de opinión á que he aludido, á saber, la reciprocidad de actitud por nuestra parte al abrir al comercio del Brasil, en cambio del as de la laguna Merín y del Río Yaguarón,

las aguas del Tacuarí y del Cebollati, porque en cuanto al Río Negro, no se le daba al Brasil nada nuevo.

Es cierto que el Brasil conservaba su soberanía sobre la Merín y el Yaguarón, soberanía cercenada, nominal, hasta cierto modo, desde que adquiríamos, «irrevocablemente y á perpetuidad» la navegación de nuestra bandera en sus aguas.

Y á propósito, cabe aquí decir, ó, quizá, revelar, pues á nuestro pueblo se le ha mantenido ignorante de tantas cosas; ¡verdad que las guerras civiles y las rencillas que las excitan y preparan dejan poco tiempo y lugar para lo demás!; cabe decir, ó recordar, repito, que nuestro representante en el Brasil sostuvo inquebrantablemente, siempre, una tesis jurídica internacional que, por otra parte, no fué contradicha, mediante la cual la soberanía del Brasil sobre las aguas fronterizas era tan sólo relativamente á la navegación comercial.

Como ejemplo, reproduciré algunos párrafos de uno de los Protocolos de la revisión del tratado de comercio del año 51:

«...La adopción del «uti-possidetis» incluía el reconocimiento del hecho existente en la laguna Merín y en el Yaguarón.

«Ese reconocimiento fué hecho, no podía dejar de ser hecho.

«El Brasil tenía y quedó con la «navegación comercial» exclusiva de las aguas de que se trata.

«La República tenía y ejercía los otros derechos de su posición como ribereña; con ellos quedó.

«Con ellos quedó, porque es inconcuso que estas cesiones de derechos se suponen siempre hechas sin perjuicio de los demás del cedente, si lo contrario no se declara expresamente, ó si su reserva no resulta imposibilidad ó absurdo manifiesto.

«Con ellos quedó, porque ellos eran y son parte del «uti-possidetis.»

«Para ejemplarizar: á los territorios «arcifinios» está anexa la accesión aluvial; y por ese derecho el territorio puede acrecer por el retiro lento de las aguas.

«¿Tiene ó no, la República, ese derecho? La tiene sin la mínima duda; y, como ese, los otros no reconocidos en el Brasil, los otros no comprendidos en el «uti-possidetis» del Brasil, anterior y existente en 1851.»

. . . . .

Así, pues, si bien el Brasil conservaba, por el tratado del 67, una soberanía fronteriza, ella se reducía y aplicaba, según la tesis enunciada y no refutada por sus representantes, como interpretación y aplicación del «uti possidetis», á la «navegación comercial» de sus aguas,—navegación que, por ese tratado, el Brasil cedía «perpetuamente é irrevocablemente» al Estado oriental, en el sentido de compartirla, de usufruirla con él en igualdad de condiciones.

En el hecho, era, prácticamente, un condominio, una mancomunidad de soberanía.

¡Y ese tratado fué desaprobado, rechazado por nosotros!

¡Y es así, como se prolongaron por más de 40 años los perjuicios y las vejaciones de la exclusividad del Brasil en las aguas fronterizas!

. . . . .

No habiendo sido aprobado el tratado de 1867, este no pasó de un proyecto sin efecto, sin consecuencia internacional, permaneciendo intacto el «statu quo ante», esto es, quedaron inalterados los compromisos del pacto de 1857, completado por las inteligencias consignadas en las notas transversales Lamas-Maranguape, de 1858, que precedieron al canje de las ratificaciones.

Constituían esos compromisos la situación internacional de los dos países, relativamente á las aguas fronterizas, cuando, en 1909, abordaron de nuevo, el Brasil y el Estado Oriental, para solucionarla amistosa y equitativamente, la eterna cuestión.

---

Conviene recapitular, aunque sea en parte repitiendo lo ya antes referido, cuales eran, en las diversas épocas de nuestra historia, las líneas fronterizas del hogar nacional,—vagas al principio, más definidas después, dentro de un radio máximo,—á través de las singulares y contradictorias peripecias de nuestra organización política.

No es aventurado aseverar que hubo más conformidad y fijeza en las intuiciones é ideas emitidas por los orientales en cuanto á lo que constituía, en realidad, nuestro patrimonio territorial,—salvo una nebulosa que vagaba por los espacios de la imaginación, respecto á posibles é inmensos ensanches de fronteras que ora abarcaban parte de la zona portuguesa y ora comprendían, además, la mesopotamia argentina, lindera con el Paraguay,—no es aven-

turado, repito, aseverar que concordaron mejor los orientales de las diversas épocas, relativamente á este tópico de nuestra nacionalización, que en cuanto á nuestros destinos de pueblo libre ó dependiente, ya sea del Brasil ó de la Argentina.

Respecto á esto último, la verdad es que, fuera de aquel rasgo heroico, aunque, dadas las condiciones del momento, políticamente incensato de Artigas, al desaprobar el pacto de su representante Barreiro con el Director Pueyrredón, pacto que evitaba la radicación y dominio de los portugueses en la Provincia Oriental, apoderándose estos, desde luego, de la plaza de Montevideo, mediante una declaración de incorporación á las Provincias Unidas,—aparte ese rasgo típico, repito, de autonomía absoluta,—volviendo sobre anteriores orientaciones, arranque personal del indómito caudillo, pues escasos fueron los orientales de alguna representación, que participaron de él,—la verdad es que,—y toda verdad es buena de decirse,—desde el año 16 hasta el 27,—«entre les deux mon coeur balance»,—los orientales ora obtaban por la incorporación al Brasil ora á la Argentina, hasta que, desenlace impuesto por las circunstancias, en la imposibilidad de triunfar definitivamente el uno sobre el otro, nuestros dos grandes vecinos, que nos codiciaban, acabaron por entenderse entre ellos á nuestro respecto, otorgándonos una autonomía que, tal como la aceptamos é hicimos constar y consta aún hoy en nuestra carta orgánica de Nación, la recibimos agradecidos de sus manos.

Bien puede sostenerse, sin embargo, que aquella actitud oscilante de los orientales, al aceptar, en 1817, el blando yugo de los portugueses, como se le clasificó,—al incorporarse al Brasil en 1821, y al proclamar, en la Florida, como consecuencia de la cruzada de los 33, que «la Provincia Oriental, desde su origen, ha pertenecido al territorio de las que componen el Vireynato de Buenos Aires y, por consecuencia, fué y debe ser una de las de la Unión Argentina»,—bien puede sostenerse, repito, que esa indecisa y contradictoria orientación de los pueblos orientales fué hija del convencimiento de la imposibilidad de conquistar una independencia á que era forzoso renunciar, sobre todo, ante el triste é impresionante espectáculo que ofreciera el héroe de las Piedras, perseguido, anonadado é impotente ante las armas extranjeras, convencimiento que no impidió que, en el fondo, subsistie-

ra, latente, un vehemente anhelo de sacudir tutelas, como se ha dicho, vinieran de donde vinieran.

No es exacto que los orientales del Cabildo de Montevideo que fueron al encuentro del general Lecor, á quien acompañaba y propiciaba el Sr. Nicolás Herrera, personaje influyente de la época, para llevarle las llaves de Montevideo, donde fué recibido, bajo palio y al repique-tear de las campanas, fuera obra de una imposición ó efecto de un pánico ú amenaza. Hay que buscar la explicación del real contento de esa recepción, en la garantía que representaban las armas extranjeras para la vida y la propiedad de los habitantes, víctimas de una tiranía implacable, y de una anarquía persistente,—recepción que no hubiera sido menos entusiasta, si esas armas, en vez de portuguesas hubieran provenido de la margen occidental del Plata.

Y no cabe tergiversación posible respecto á la calamitosa situación de la Provincia, que hacia con que sus habitantes acogieran regocijados á los que los amparaban contra los Otorguez y los indígenas que, según un reciente autor, conteste con todas las referencias fidedignas, «sentaron, entonces, definitivamente sus tolderías en los campos de los actuales departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó y Rivera, viviendo á expensas de los moradores de esas comarcas y entregándose á toda clase de violencias y tropelías, asaltando las estancias, carneando, robando, asesinando...» Y no era, por consiguiente, de extrañar, por ejemplo, que Bauzá se pasara á Buenos Aires, como lo hizo, con su batallón, que los moradores de la Colonia, así como sus milicias entregaran la plaza á los portugueses...

No hubo, pues, coacción cuando el Cabildo de Montevideo recibió, en la forma que lo hizo, al general Lecor, ni la hubo cuando la incorporación del año 21, ratificada el año 24, ni cuando, tampoco, en 1825, al triunfar la cruzada de los 33, renegando y desautorizando la última «manera» de Artigas, se declaraba,—como que para eso se había invadido, desde Buenos Aires, á la Provincia Oriental, que esta «había sido siempre y debía continuar siendo parte de la Unión Argentina.»

Nuestro país se ha mostrado veleidoso en sus inclinaciones internacionales, á la par que propenso á exagerar, exteriorisándolos ruidosamente, sus arranques de adhesión y simpatía, ora hacia el Brasil ora hacia la Argentina, al

son de los acontecimientos, vehemencias que no deben ultrapasar, en todo caso, ciertos límites, si es que la oportunidad se presenta nuevamente, so pena de empequeñernos á nuestros propios ojos como á los ojos de los demás pueblos que nos observan, prontos á sacar depri- mentes conclusiones de nuestra impremeditada y, quizás, injustificada actitud. Algo de esto ha pasado últimamente, punto sobre el cual no insistiré, habiendo manifestado, oportunamente y al respecto, mi modo de pensar.

Así, pues, volviendo sobre las reminiscencias relativas á lo que pudieramos calificar tan sólo de episodios nacionales, anteriores á nuestra organización política del año 30, y digo del año 30, porque, en realidad, Artigas no organizó, no condensó nada, no fundó, propiamente dicho, nacionalidad alguna, ni lo verificó posteriormente la cruzada del año 25, destinada á anular la creación de una provincia brasilera en nuestro territorio para implantar en él una provincia argentina, reduciéndose todo á mandar nuestros representantes ó diputados al Congreso de Buenos Aires, en vez de acreditarlos ante el Congreso de Río de Janeiro, como lo veníamos haciendo,—de aquellas reminiscencias resulta, como se desprende igualmente de las consideraciones á que acabo de apelar que, no habiendo existido en nuestro país, antes del tratado preliminar de paz del año 28 y de nuestra constitución política del año 30, que fué su consecuencia, organización alguna autónoma nacional,—no habiéndose constituido, antes de esa época, en nuestra provincia, autoridad, gobierno estable alguno, consagrado por un reconocimiento exterior, hecho esencial para que se incorporen los pueblos, como entidades propias al concierto de las naciones, nosotros no habíamos existido, á parte una época caótica, revolucionaria, sino como provincia portuguesa-brasilera ó como provincia argentina, y siempre por el propio voto, en lo que cabía, de los propios pueblos orientales.

No habíamos tenido, portanto, personería legal é internacional antes de la jura de la Constitución del año 30. esto es, no habíamos existido antes como nación y, por consiguiente, para buscar los antecedentes de lo que pudiera constituir el área territorial con que se homologa nuestra autonomía, es forzoso circunscribimos á investigar cuales eran nuestros límites como provincia Cisplatina y, después, como provincia argentina, resultando que los de esta eran los mismos que los de aquella, así como que tanto el Brasil, al decir que «declara sepa-

rada del territorio del Imperio del Brasil la Provincia Cisplatina», para que se pueda constituir en Estado independiente, como la Argentina, al declarar que «concuerta» con ese hecho, «en la forma» declarada en el artículo antecedente», esto es, que sea la Provincia Cisplatina la que se constituya en Estado independiente, establecieron, bien claramente, que los límites del nuevo Estado serían los de la Provincia Cisplatina, prolijamente designados en el acta de incorporación del año 21.

Esto no tiene vuelta; pero hay que observar, además, que el Brasil era el heredero, en esta parte de América, de los derechos coloniales de Portugal y la Argentina la sucesora de los de la corona de España; y estas dos entidades se habían puesto de acuerdo y habían resuelto que «tal porción territorial», parte de una mayor que ellas se disputaban en virtud de los tratados de 1750, de 1777 y de 1801, «la separaban de sus dominios», renunciando á sus derechos á su respecto para que en ella, esto es, en esa porción, delimitada en el acta de incorporación de año 21, con el nombre de Provincia Cisplatina, se organizase un Estado independiente.

Tanto el Brasil como la Argentina habían limitado su liberalidad, habían circunscripto su desprendimiento, pues como tal resulta del texto del tratado del año 28, tratado que, como herencia ó donación habíamos aceptado sin beneficio de inventario, á aquella porción territorial que constituía la Provincia Cisplatina, no pudiendo entenderse, de ninguna manera, que la Argentina transmitía, además, sus derechos coloniales al nuevo Estado, para disputar mayor extensión territorial al Brasil, ni que el Brasil hiciera lo propio respecto á la Argentina; y tan esto era absurdo, contrario á los textos, al espíritu, á la lógica de lo resuelto, pactado y aceptado, que alguna vez cuando, más tarde, algo se insinuó en ese sentido el Brasil y la Argentina coincidieron en declarar que, «no consentirían jamás» que ni siquiera se plantease la «descabellada» pretensión.

Aún admitiendo, para agotar la argumentación, que aquellos no hubieran sido los antecedentes de la cuestión y estas las actitudes al respecto, de nuestros grandes vecinos y que, por consiguiente, subrogados en los derechos hereditarios argentinos, hubiéramos sometido, por ejemplo, la cuestión de una mayor extensión territorial, á la decisión de un árbitro. ¿cuál hubiera sido el resultado?;

conocido es el fallo de los Estados Unidos en el litigio de Misiones, entre la Argentina y el Brasil.

¡Y hay quienes, aún hoy, entre nosotros, tales son los efectos desconcertantes de ciertas prédicas, creen que hemos «perdido», que nos han «arrebataado» millares de leguas de territorio, situadas más allá de las fronteras del Estado Cisplatino!

Y tan es esto cierto, que un ciudadano distinguido, que ocupa un alto puesto en nuestra representación nacional, con motivo de describir el palacio de Itamaraty y las sensaciones que él sintiera al visitarlo, exclama, muy convencido: «de aquellos lujosos gabinetes había partido el esfuerzo que nos había hecho «perder», en el correr de los años, «la tercera parte del territorio.»

Todo eso es inexacto, empezando por «aquellos lujosos gabinetes, etc.», donde recién, esto es, desde reciente fecha se instaló la cancillería brasilera, habiendo sido construído y habitado el palacio de Itamaraty por el Barón de ese nombre, el que fué adquirido, después de su muerte, por el Gobierno brasilero; y en cuanto á lo de la «pérdida» de la tercera parte del territorio, no pasa y nunca ha pasado, como se comprueba una vez más en el correr de estas páginas, de una simple invención, desde que no se pierde sino lo que se posee, y la verdad y el hecho es que nunca, ni en la época embrionaria y revolucionaria, poseíamos «ni una lonja más de territorio», según la frase del Señor Setembrino Pereda en su libro «Martín García», que el que hoy poseemos; y hay razón para agregar que no sólo nunca poseímos sino que nunca tuvimos «derecho» á poseer mayor territorio que el que se derivó del tratado del año 28, no debiendo confundirse el significado de la palabra que acabo de subrayar con sueños, aspiraciones y vehemencias nacionales, muy explicables y justificables cuando ingenuamente las alimentan los pueblos, á la vez que muy vituperables cuando las explotan malévolamente los círculos ó partidos políticos, para engendrar odios y malquerencias colectivas y aún personales.

Para que no se diga que omitimos algún dato ó circunstancia relacionada con nuestros límites territoriales, vamos á recopilar á grandes rasgos los antecedentes cardinales.

Artigas, en sus instrucciones á «los representantes del pueblo oriental», ante la Asamblea constituyente de Buenos Aires», decía que, «el territorio que ocupan estos pue-

blos se extiende desde la costa oriental del Uruguay hasta la fortaleza de Santa Teresa y forman una sólo provincia, denominándose Provincia Oriental.»

El mismo Artigas, al referirse á los territorios de Misiones, decía, «el territorio portugués». En oficio dirigido á Andresito, en 15 de Setiembre de 1816, escribía: «no hay que esperar que los portugueses nos ataquen; debemos penetrar á «su» territorio.»

El Cabildo de Montevideo, se dirigió en 15 de Enero de 1819 al Barón de la Laguna, proponiéndole la fijación de límites, en documento en que se lee lo siguiente: «Este Cabildo, como V. Ex. sabe, representa los derechos de esta Provincia y fué electo por todos sus pueblos, y conserva todavía todos sus poderes para promover lo que convenga á su prosperidad común;

«V. Exc. sabe que los límites que separan esta Provincia de la de Río Grande, de San Pedro del Sud, no están bien demarcados, y que la línea divisoria de ambos territorios, podría rectificarse con utilidad común; basta examinar el plano geográfico de dichas Provincias, para convenirse de esta verdad. Si la línea de demarcación se tirase por los puntos que indica la naturaleza de los terrenos, ríos y montañas de sus inmediaciones, desaparecería la confusión de límites que ha dado mérito á tantas desavenencias.

«El Cabildo propone á V. Exc. la demarcación de la línea de ambos territorios sobre estas bases: Empezará en la mar, á una legua al sur del fuerte de Santa Teresa; seguirá al N. O. del fuerte de San Miguel; seguirá la margen occidental de la laguna Merín, continuará como antes por el río Yaguarón; seguirá una línea recta hasta el paso de Lezcano en el Río Negro; y de allí costeará al O. N., en derechura á las nacientes del Arapey, cuya margen seguirá hasta la confluencia con el Uruguay.»

Tales fueron los límites del año 19, propuestos por los representantes de los pueblos de la Provincia Oriental, aceptados por el Brasil, demarcados sobre el terreno por los comisarios Don «Prudencio Murguiondo», por los orientales, y por Don «Juan Baptista Alves Porto» por el Brasil, figurando entre los miembros del Cabildo de Montevideo que iniciaron la negociación y ratificaron la operación demarcadora los ciudadanos: «Juan José Durán, Juan Benito Blanco, Juan Correa, Agustín Estrada, Juan Francisco Giró, Lorenzo Justiniano Pérez, Francisco Joaquín Muñoz, José Alvarez.»

En 1821, la Provincia Oriental se incorporó al reino de Portugal, Brasil y Algarves bajo la denominación de Estado Cisplatino, con el asentimiento de «los representantes de los pueblos orientales», figurando entre los firmantes del acto solemne los ciudadanos «Fructuoso Rivera, Dámaso A. Larrañaga, Tomás García de Zuñiga, Gomen-soro, Gallegos, Chucarro, Visillac, Llambí, Pérez, Silva, Ximeno, etc.», esto es, todo lo más notable y representati-vo de la Provincia; y en cuanto á los límites que se le dieron al nuevo Estado, consignándolos en aquel acto, fueron más ámplios que los del año 19, especialmente en lo que hace á la línea sobre el río Uruguay, desde que la frontera se fijó en el Cuareim en vez de en el Arapey.

El Gobierno de la Defensa, en las «instrucciones» que llevan la fecha de 25 de Febrero de 1845 y las firmas de Joaquín Suárez, Santiago Vásquez, Rufino Bauzá y San-tiago Sayago, dirigidas á Don Francisco Magariños, mi-nistro oriental, acreditado entonces en la corte del Brasil, recordaba que «el «hecho» es que cuando las colonias es-pañolas se alzaron en 1810, las fronteras de la Banda Oriental, eran las márgenes septentrionales del Yaguarón, hacia la Laguna, y del Quareim hacia el Uruguay»; que en 26 de Mayo de 1812, se concluyó en Buenos Aires un armisticio ilimitado entre la Junta de Gobierno y el Prín-cipe Regente de Portugal según el cual la ocupación por-tuguesa debía limitarse al Yaguarón y al Quareim, pero que el «derecho» debía buscarse en las constancias del **tratado** de San Ildefonso; trayendo á la memoria que por el «acuerdo» de Montevideo de 1819, habíamos retro-gradado la línea del Quareim á la del Arapey, pero que por el acto de incorporación del año 21, al crearse el Estado Cisplatino, se había avanzado nuevamente la fron-tera al Quareim»,—concluyendo ese conceptuoso docu-mento con las siguientes frases: «Hubo, pues, pacto expre-so sobre los límites con que la Provincia Oriental pasaba á ser la Provincia Cisplatina, perteneciente al Brasil; con esos límites, la conservó éste en su asociación y con ellos la dejó luego erigirse en Estado independiente; la guerra entre las provincias argentinas y el Imperio, sobre la posesión del territorio oriental, terminó por la Convención preliminar de 27 de Agosto de 1828, cuyos dos primeros artículos declaran la independencia de la «Provincia de Montevideo, llamada hoy Cisplatina», y como esa Provincia Cisplatina estaba encerrada en los límites demarcados en el pacto que la dió aquel nombre, es claro que quedó

independiente todo el territorio así llamado y encerrado en esos límites; ningún acto, documento ninguno existe que induzca la mínima duda á ese respecto, y és, por consiguiente, de completa evidencia que «los actuales límites de la República, son de hecho, los designados en el acto de incorporación, los mismos que existían al tiempo de la emancipación de estas colonias.»

Como se vé, el Gobierno de la Defensa, se esforzaba, como «desideratum», en conservar el «hecho» existente, esto és, la línea del Quareim, porque, por lo que respecta á mayores ensanches, vale decir, á ampliaciones fundadas en las antiguas demarcaciones, la República, se contentaría con «una justa compensación pecuniaria», resultando del propio alegato firmado por los ilustres y beneméritos ciudadanos que hablaban en nombre de la República, en la más memorable época de su historia, que lo que buscábamos, en realidad, lo que pretendíamos y aspirábamos, era el «uti-possidetis».

En 1851, se confirmaron los límites del año 21, esto es, se consiguió, por el respectivo tratado, no obstante que este se firmó en las angustiosísimas circunstancias que se sabe, el máximo de territorio que habíamos poseído en toda y cualquiera época, vale decir, el territorio con que nos constituímos en Nación libre é independiente, el territorio para cuya posesión teníamos título, sobre él y no sobre ningún otro, resultando, por consiguiente, que no nos sometimos, en esa oportunidad, al más mínimo sacrificio territorial.

No obstante, ese tratado, estos arreglos, dieron motivo á denuestos y diatribas por parte de los hidrófobos de nuestra política pequeña, que desfiguraban los hechos, que adulteraban las circunstancias; y tal era la enormidad de semejante actitud, que los grandes servidores de la patria que, á la vez que obtuvieron los elementos para salvarla, salvando á Montevideo, no sacrificaron ni un átomo de su real y positivo territorio, consiguiendo que ya no podía ponerse en duda que nuestra frontera, en el Uruguay, fuera en el Quareim y no en el Arapey, resolvieron callar, librando á la posteridad y á la historia la justicia que les correspondía.

Esa fué la resolución, esa la actitud del Dr. Andrés Lamas, el negociador de los tratados del 51, el concertador de la alianza que volteara á Rozas, cambiando la faz política y social del Río de la Plata.

El Dr. Manuel Herrera y Obes calló también, por

mucho tiempo, indignado y dolorido; pero, quince años después, esto es, en 1867, se decidió á hablar, ante una nueva exhumación de las vulgaridades con que se había pretendido tildar la conducta de aquellos actores de la inmortal y fecunda epopeya.

Contestando al autor de un artículo de «La Tribuna», de Buenos Aires, así se expresaba:

«El altivo y firme silencio con que he contestado á tales diatribas, prueba á Vd. el valor é importancia que les doy, y si algún sentimiento avivase en mí, es el de un legítimo orgullo de verme así confundido en la historia con esa crecida série de hombres eminentes, del antiguo y nuevo mundo, siempre recompensados de ese modo, por los pueblos á quiénes mejor sirvieron y más bien hicieron.

...«Por la situación en que Montevideo se encontraba, no podía ni debía aspirar á más que á salvarse con todos los intereses morales y políticos de que era depositario: sin detenerse en sacrificios que, por grandes que fuesen, quedarían infinitamente lejos de los que había hecho ya para conservar ese sagrado depósito que simbolizaba toda la vida futura de estos pueblos.

...«Desde 1830, existía una cuestión entre la República y el Imperio, sobre los límites de sus respectivos territorios.

«Aquella reclamaba lo que le daba el tratado de 1828, «origen único de nuestra actual nacionalidad», y el otro se las negaba, invocando su convenio de 1819 con el Cabildo de Montevideo, que los fijaba en el Arapey. El General Oribe, en 1835, trataba de obtener lo que la República pretendía, ofreciendo, en compensación, auxiliar al Imperio para someter á los revolucionarios de Río Grande; y no obstante los sacrificios de sangre y de dinero que esto importaba, las propuestas y pretenciones de nuestro Gobierno fueron desechadas!

«Y bien: en 1851, lejos de imponernos el Brasil, lo que había sostenido, nos acordó, sin compensación, lo que antes había negado, esto es, los límites del Quareím.

«El ejército imperial y su escuadra, ocasionaban cuantiosos gastos que el gobierno imperial había podido exigir; sin embargo, no lo hizo, y apenas quedamos obligados á la devolución de los suplementos pecuniarios que nos había hecho.

...«El Gobierno pactó, pues, de igual á igual, con sus aliados, á pesar de su desventajosa y notoria situación.»

Tales son los hechos, la verdad, la historia que concluirán por triunfar de los extravíos de la conciencia pública.

---

Llegamos, ahora, al epílogo de la penosa y demorada controversia de la navegación de las aguas que, por el Norte, nos dividen con el Brasil, epílogo de que todos debemos regocijarnos y nos hemos regocijado, con justa causa, si bien la obra consumada convendría ser completada, consolidada, aprovechando las buenas disposiciones del país vecino, como paso á comprobarlo.

El tratado Domínguez-Río Branco, no proclama el derecho natural en las aguas que nos dividen, no nos reconoce ese derecho. Lo que hace el Brasil, es cedernos, y condicionalmente, por añadidura, una parte de su soberanía sobre una parte de las aguas de la laguna Merín y del río Yaguarón.

Esto necesita una explicación.

Se conviene en trazar una línea media entre las dos márgenes: por esa línea correrá nuestra frontera, esto es, nuestra soberanía se extenderá sobre la mitad de las aguas materia de la controversia, soberanía limitada, sujeta á condiciones, esto es, el Brasil nos cede una parte de las aguas, sobre las cuales sólo ejerceremos una parte de soberanía y esto, «mientras observemos las condiciones impuestas.»

Y no es, infelizmente, sin fundamento que hemos subrayado, colocándolas entre comillas, las últimas palabras que se acaban de leer, como se verá más adelante.

Temería contrariar á los panegiristas, «á outrance», del nuevo y reciente tratado, al analizar, con la ecuanimidad é independencia con que lo hago y cuadra á la materia, la pieza diplomática en cuestión, derecho, sin embargo que no se me negará, tanto más que los anteriores pactos con el Brasil han sido sometidos á una disección tan absoluta, frecuentemente malévola y, á veces, escasamente leal y patriótica.

El nuevo tratado ha sido considerado á través de una atmósfera tal de entusiasmo y de optimismo, que ha impedido percibir cual era su verdadera significación y alcance. Yo no le he mesquinado mis aplausos, pero, obedeciendo á un dictado de conciencia, en medio del delirio general, cumplí con el desagradable deber de manifestar que me parecían exageradas las ovaciones decretadas, desde que el Brasil no hacía más que cumplir, en forma galante, es

verdad, aunque muy tardíamente, un compromiso consignado en un pacto internacional.

La forma galante, consiste en que, en vez de ceder el derecho á navegar aquellas aguas, cede el Brasil una soberanía sobre esas aguas. Eso de soberanía, fué la causa del delirio, sin darse cuenta los que se dejaban dominar por la sujestión de la palabra, que la significación real de la cosa no modificaba la fórmula anterior y, quizá, la empeoraba.

Analícemos con calma, sin pasión la nueva y la antigua situación.

En 1857, obtuvimos la navegación en común de las aguas fronterizas, cesión permanente é irrevocable, hecho que sólo quedaba dependiente de estudios locales para la adopción de los reglamentos necesarios, los que se dictarían con arreglo á los principios del Congreso de Viena.

En 1867 se firmó el tratado que confirmaba aquella conquista diplomática, declarándose que el derecho que se nos concedía era «perpetuo é irrevocable». Era, pues, un derecho nuestro, definitivamente nuestro.

El representante uruguayo ya había dejado establecido, como lo expliqué en páginas anteriores, que teníamos, que siempre habíamos tenido la soberanía de nuestras riberas. Así, pues, quedaba establecido, que teníamos la soberanía de las márgenes ó riberas y que, además, por cesión del Brasil, teníamos el derecho para navegar, perpetuamente, las aguas fronterizas.

Hoy tenemos, en lugar del derecho de navegar, «irrevocablemente» las aguas de que se trata, la «cesión condicional» de la soberanía sobre esas aguas. El Brasil nos cede «condicionalmente» esa soberanía. Y «condicionalmente» quiere decir que, «el día en que el cesionario falte á alguna de las condiciones impuestas y aceptadas, el cedente le podrá retirar la soberanía.»

No es tampoco sin fundamento, antojadísamente que he subrayado, colocándolas entre comillas, las palabras del párrafo que antecede.

Las condiciones impuestas reducen la soberanía cedida á la facultad de navegar las aguas, lo que vale á decir que en vez de una cesión «irrevocable» de navegar esas aguas que nos garantían las estipulaciones de 1857 y de 1867, tenemos hoy esa misma navegación «revocable», esto es, permanentemente sujeta á condición.

Nos hemos dejado seducir por la palabra «soberanía» y hemos aplaudido á «tout casser».

Sin analizar bien lo estipulado, lo que es lamentable, nos hemos conceptuado realmente soberanos, cuando, en realidad, una soberanía condicionada no es una soberanía; y si señalo lo que señalo, es con la leal y buena intención de que se trate de corregir la plana, que bien lo merece.

No solamente la soberanía que nos cede el Brasil nos impide admitir otras banderas que la nuestra y la del país vecino en «nuestras aguas»,—no solamente no nos faculta para tener sinó tres pequeñas embarcaciones de guerra en «nuestras aguas», sinó que el cedente invade la soberanía de nuestro territorio y nos hace comprometernos á no levantar fuertes ni baterías en nuestras costas; tampoco podremos tener ni una lancha armada, fuera de las tres pequeñas embarcaciones susodichas, ni aún en algún afluyente nuestro de la Merín ó del Yaguarón.

También se enumera la condición de que habremos de respetar los derechos reales adquiridos por brasileños ó extranjeros en las islas que caen bajo nuestra jurisdicción.

Es cierto que lo relativo á la interdicción de levantar fortificaciones en las costas, es á título de reciprosidad, lo que nada nos aprovecha, siendo lo real y positivo que la «soberanía» que se nos cede, se reduce á un derecho de navegar con nuestra bandera aquellas aguas tan discutidas y anheladas, cercenándosenos, además, ciertos actos de soberanía dentro de nuestro propio, antiguo y actual territorio.

¡Y lo peor del caso es que esa misma limitada soberanía que se nos cede es tan efímera!, dependiendo, como queda dicho, de diversos reatos y condiciones; y es así como resulta, que está lejos de ser una solución definitiva el tan celebrado pacto internacional, porque, tratándose de una cesión condicionada, no solamente puede dar lugar la falta de una de las condiciones,—falta que puede ser nimia, como la de que se nos probase que teníamos, oculta en un arroyo, una cuarta lancha de guerra, ó que se había desconocido, por cualquiera autoridad nuestra, alguna propiedad particular en las islas que se nos ceden, etc.,—á la anulación del acto de cesión, sinó que puede fundarla, también, una simple «ingratitude» de parte del cesionario, equivalente de donatario, hácia el cedente ó donante.

Y para que no se suponga que exagero la eventualidad de que el Brasil pueda, un buen día, fundado en la falta ó pretendida falta de cumplimiento, por nuestra parte,

de alguna de las condiciones bajo las cuales nos concedió una parte de soberanía, ó soberanía limitada, sobre una parte de las aguas del río Yaguarón y de la laguna Merín, voy á citar un antecedente.

El tratado de comercio y navegación de 4 de Septiembre de 1857 se firmó simultáneamente con el llamado de permuta de territorios,—insignificante cuestión de rectificación fronteriza que ya expuse y expliqué,—cuya aprobación y cange debió haberse realizado al propio tiempo; pero el hecho es que así no sucedió, aprobándose y canjeándose las ratificaciones del tratado de comercio y navegación, mientras nuestro Gobierno prometía ocuparse más adelante del de permuta.

Entre tanto, el Gobierno Imperial, entendía que la promesa de considerarse simultáneamente ambos tratados, constituía una condición para la subsistencia de la parte comercial del de 4 Septiembre; y en presencia de que el Gobierno Oriental postergaba indefinidamente la aprobación del de permuta, con lo que, á su entender, faltaba á la condición establecida, mandó suspender,—suspensión que equivalió á anular ó dejar sin efecto,—por simple Decreto, que lleva la fecha de 29 de Septiembre de 1860, bajo el N.º. 2653, la ejecución de la parte comercial del tratado que reglaba el intercambio fronterizo, impartiendo, sin más trámite, las instrucciones del caso á las autoridades río-grandenses, y eso que nuestro plenipotenciario en Río de Janeiro clasificaba, en nota de 29 de Marzo de 1860 de «muy cuestionable compromiso» el de la aprobación simultánea de los dos tratados y justificaba, en todo caso, la demora de la consideración del de permuta por parte de nuestro Gobierno ante mayor demora por parte del de su Majestad en resolver varias reclamaciones pendientes relativas á conflictos fronterizos.

Y el hecho es que el Brasil, fundado en el falseamiento de una condición, dejó sin efecto, sin más trámite, un tratado aprobado y en vigencia, cuyas ratificaciones habían sido canjeadas solemnemente.

Pudieran, quizás, considerar algunos de los conciudadanos que recorran estas páginas, no obstante el caso, sugestivo, que acabo de poner bajo sus ojos, caso que se diera entre las mismas partes, en época relativamente reciente, que la cesión por parte del Brasil es irrevocable, no pudiendo en ningún caso dejarla este sin efecto.

Tal vez se argumente con la falta de derecho para ello;

pero no se podrá profundizar la afirmación, ni insistir en ella si se recorre á los tratadistas, si se apela á la codificación internacional.

El Brasil, por el último tratado, no nos reconoce un derecho, ni derivado de la naturaleza, ni fundado en pactos anteriores, al ponernos en posesión de parte de las aguas fronterizas, sino que empieza por establecer, como siempre lo había hecho, que se trata de una cosa suya, exclusivamente suya, que en parte cede al vecino, con arreglo y sujeción á diversas condiciones, condiciones que el vecino cesionario acepta, consignándose el todo en un pacto, claro, explícito al respecto.

Es sabido que en derecho común toda donación, ó cesión, que es lo mismo, realizada bajo condición, es revocable si la condición no se cumple; la cosa donada queda dependiente, como propiedad ó usufructo, del cumplimiento, por parte del donatario, de la condición, de la observancia de los deberes que le impusiera el donante y que aquél aceptó; y probada la falta de ejecución de lo estipulado, sea una obligación de hacer ó de no hacer, la revocatoria es un derecho, expreso, tácito, que todas las leyes, de todas las naciones, reconocen uniformemente al cedente ó donante.

No me detendré en comprobar esta tesis, universal é inconcusa. Bastará que, entre nosotros, abran nuestro Código Civil, en su capítulo de las donaciones, reflejo, principalmente, de las disposiciones del Código Napoleón, inspirado, á su vez, en el Derecho Romano; pero si se desea profundizar la materia, recúrrase á las admirables disertaciones, sobre el particular, de Savigny, de Demolombe, de Pothier, de Aubry y Rau, y de tantos otros ilustres tratadistas.

Pero, se dirá, ¿será lo mismo en Derecho Internacional que en Derecho Civil y Doméstico?

Vamos á verlo.

No hay que olvidar que el tratado reciente lo que registra es una cesión, una donación por parte del Brasil, que nosotros, pueblo y gobierno, reciprocamente sujecionados, hemos aceptado, delirantemente regocijados, como un acto de magnanimidad y desprendimiento por parte del poderoso vecino.

La conquista, tan larga y laboriosa, de nuestra diplomacia, consistente en que el Brasil reconociera, como explícita y solemnemente reconoció, que la navegación en

común de las aguas fronterizas sería un hecho de «mutua conveniencia y recíproca utilidad», fué olvidada, abandonada, sacrificada, renunciada en el texto del reciente tratado.

El Brasil no quería, no podía, propiamente dicho, reconocernos el derecho á navegar esas aguas; pero hubo de reconocer, reconoció que, al consentirlo como un usufructo permanente, irrevocable, lo haría por que le convenía tanto á él como á nosotros.

Este era el carácter que debía tener la convención que, propiamente, se acordó en 1857, y que sólo quedó dependiente de reglamentación, cuyos principios liberales también quedaban convenidos.

Ese carácter era importantísimo, esencial, para la propia subsistencia y consolidación del acuerdo.

En cambio de eso, tenemos hoy un acto de simple donación, así establecido, así proclamado, «urbi et orbe», un arranque espontáneo de generosidad y desprendimiento, una acción magnánima, como rezan nuestros documentos oficiales, por parte del Brasil.

El carácter de la convención, es, pues, hoy otro, — y esto importa mucho al ser encarada la situación jurídica internacional creada por el reciente tratado, al ser considerada del punto de vista del Derecho de Gentes.

Los principales tratadistas, entre los cuales Grotio, Vattel, Pradier-Fodéré, Wheaton, Bluntschli, Heffter, están contestes en declarar que «el derecho internacional admite para los tratados, los principios del derecho civil referentes á los contratos.»

Y analizando las diversas naturalezas de condiciones, expresas ó tácitas de los contratos, también coinciden esos y otros tratadistas, en que es tácitamente resolutoria, por parte de la potencia que gratuitamente ha acordado un derecho, usufructo ó prerrogativa sometida á condición, cuando el beneficiario deja de observar ó de someterse á lo estipulado, pudiendo aquella retrotraer la situación á la época anterior á aquella en que el acto se había formalizado.

No cabiendo, en las proporciones de este opúsculo, citar particularmente á los diversos autores, me limitaré á reproducir las siguientes palabras de Pradier-Fodéré («Traité de Droit International Public», 5. II, N.º. 1208, París 1885), que condensan la tesis uniforme de los tratadistas; hélas aquí: «seulement il y a une difference en-

«tre le droit civil et le droit international, quant á l'effet  
«de la condition résolutoire tacite: la resolución n'a pas  
«lieu de plein droit, d'après les lois civiles; elle doit  
«être demandée en justice; il ne saurait être question de ce-  
«la en droit international; quant il s'agit d'une condition  
«résolutoire tacite, la defección ne peut donner lieu á  
«aucune action; la partie leseé, considering que c' est une  
«violation qui en supprime les effets, est fondée, si elle  
«le juge á propos, á se considerer comme degagée.»

Y agregaré, por último, otra valiosísima opinión:

Vattel («Le droit des Gens», edition de 1863, T. II, pág. 192), no es menos explícito al respecto, pues, al encarar la hipótesis de que una de las partes falte á la condición, dice que, la otra parte, en vez de recurrir á las armas para obligarla al cumplimiento de lo pactado, «il lui est quelque fois plus expedient de se degager «aussi de ses promesses, de rompre le traité; il est indubi- «tablement en droit de le faire, si ayant rien promis que «sous la condición que l'autre partie accomplirait de son «coté toutes les choses auxquelles elle s'est obligée, la «partie lesée peut donc choisir, soit la contraindre á remplir «ses engagements, soit de declarer le traité rompu.»

Vale bien, pues, la pena que todo se aclare y se explique, á fin de que se cierre definitivamente, respecto á las aguas fronterizas con el Brasil, un enojosísimo ciclo de conflictos entre ambos países.

Por lo menos desearíamos que nuestro Gobierno se empeñase en obtener, y que así se declarase, 1º que la «cesión de soberanía se entendiese hecha por el Brasil irrevocablemente, á perpetuidad, y por mútua conveniencia, comercial y amistosa de ambos países, y 2º, que en caso de disidencias, entre los dos países, relativamente al cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas, el conflicto fuera sometido á decisión arbitral, caso de no poder solucionarse diplomáticamente.»

La crítica á que he sometido el reciente tratado que, como acto de justicia, la historia registrará bajo el nombre de Bachini Río Branco, responde al deseo de provocar su revisión y complemento, con lo que solucionaríamos, efectivamente, la ya vetusta cuestión de las aguas fronterizas, revisión que, á mi entender, convendría

iniciar cuanto antes, aprovechando las justicieras y, sin duda, benévolas disposiciones del Gobierno brasileiro.

Acabo de indicar cuales serían las declaraciones que, á mi entender, transformarían un acto de «donación bajo condición», aunque en forma de convención internacional, en un derecho irrevocable de jurisdicción, por nuestra parte, sobre la mitad de las aguas de la laguna Merín y del río Yaguarón.

En un mensaje dirigido al parlamento por el presidente de la República del Brasil, anunciando la intención de realizar el acto, que más tarde se ultimó, se lee lo que sigue: «procediendo de esta manera, trataremos á aquella República vecina y amiga, como hemos tratado y tratamos á todas las otras en la determinación de nuestras fronteras fluviales; y nos conformaremos con las reglas de demarcación observadas por todos los demás países en América y Europa en lo concerniente á ríos y lagos fronterizos.»

Es cierto que, especialmente á favor del Perú, el Brasil ha hecho cesiones, sometidas á la espada de Damocles de especificadas y permanentes condiciones, relativas á las aguas fronterizas; esto es, ha hecho cesiones de la naturaleza de la que acaba de otorgarnos; pero no me consta que haya aplicado, que se haya «conformado», como se dice en la segunda parte del párrafo transcripto, «á las reglas de demarcación observadas por todos los demás países en América y Europa en lo concerniente á ríos y lagos fronterizos», porque esas reglas son las del derecho natural, que el Brasil no ha aplicado ni reconocido, á que no se ha «conformado», al establecer el régimen de sus aguas linderas al oeste, al norte ó al sur de su inmenso territorio; y lo que es respecto á nosotros, á la República Oriental del Uruguay, no es por cierto el derecho natural el que nos ha reconocido, ni ese ni ningún otro derecho, limitándose á hacernos una donación, sujeta á diversas condiciones.

Para enmendar la plana,—contando con la plena buena fé y las leales y buenas intenciones del Brasil, como creo que podemos y debemos contar plenamente, dado sus nobles y constantes procedimientos á nuestro respecto desde hace más de medio siglo, — no veo otro medio que solicitar y obtener de la cancillería vecina, como lo dejo indicado, que haga extensivas al acuerdo reciente las declaraciones y compromisos consignados en el tra-

tado de 1857, así como en las notas Lamas-Maranguape que precedieron al canje de sus ratificaciones, á saber: que el acto de que se trata, ha sido establecido «por mútua conveniencia y recíproca utilidad», así como que la cesión de soberanía que se consigna, tiene el carácter de «perpetua é irrevocable», agregándose que toda divergencia relativa al cumplimiento de las condiciones con que, por ese tratado, se ha limitado el ejercicio de dicha soberanía, así como cualquiera otra desinteligencia que la diplomacia no consiga solucionar, será sometida al fallo de un arbitro que se designará.»

Quizá pudiera objetarse que el sometimiento á arbitraje general y obligatorio, para toda cuestión, que pudiera existir, como convención, entre ambos países en el momento en que surgiesen divergencias relativas al cumplimiento de las condiciones que el Brasil nos impuso por el último tratado, hacen innecesario el agregado que á este respecto acabo de aconsejar, á lo que desde luego debo contestar, que siempre son cuestionables los casos que realmente son «sometibles» á arbitraje, por amplios que sean los términos de los tratados, por lo que sería, por lo menos, prudente, si se ha de consolidar la buena obra de que se trata, «adherir», individualizar al pacto reciente, fronterizo, la cláusula indicada, la que desde luego tendría la virtud de imposibilitar que, un buen día, «motu proprio» (pues es sabido que no siempre revisten el mismo grado la cordialidad y buenas disposiciones de los gobiernos entre sí), pudiera el país vecino reeditar, relativamente al tratado Domínguez-Río Branco, el Decreto que he citado, de 1860, que dejó sin efecto el tratado, en su parte comercial, de 1857.

Sólo de este modo consolidaremos una obra excelente, digna de aplauso, que refleja tanto honor sobre los ciudadanos que intervinieron en su gestión, especialmente por la buena y patriótica intención de que dieron prueba; sólo de ese modo conquistaremos una verdadera soberanía, en vez de una soberanía «sub conditione» y que, según los tratadistas, no es «soberanía», siendo incompatible con el significado jurídico, intrenacional y universal de la palabra, la sujeción del ejercicio de sus prerrogativas, que es la facultad ilimitada de hacer ó de no hacer, sin control ajeno, á deberes ó condiciones impuestas por un poder extraño, exterior.

Antiguamente, en tiempos del feudalismo, existían soberanías y semi-soberanías, ó soberanías dependientes ó so-

metidas á cargas ó condiciones extrañas, designación, esa última, que, en el régimen del internacionalismo moderno, «no pasa de una anomalía», dice Pradier Fodéré (obra citada, T. I. N.º. 86), y «de un contrasentido», agrega Hefter («Le droit international de l'Europe», 1873, § 19, p. 40); y no hay que dudar, sin abundar en mayores citas, que lo que nos otorga el Brasil, por el tratado en cuestión, es menos que una «semi-soberanía», desde que no solamente nos cercena y limita atribuciones legislativas y administrativas, relativas á las aguas que nos cede, reservándose el tácito derecho de investigación en nuestra casa, sin contar que esa limitación se hace extensiva á los afluentes y riberas colindantes, que ya nos pertenecían, sino que esa misma semi-soberanía está sujeta, como lo he comprobado, á una posible y eventual anulación, dado su origen de «generosa y espontánea donación condicional.»

Las enmiendas que propongo, modificarían fundamentalmente el carácter, significado y proyecciones del tratado, desde que la subsistencia de nuestra nueva soberanía quedaría á cubierto de capciosidades, siempre posibles, como de interpretaciones y apreciaciones antojadizas de parte del donante, respecto al cumplimiento de las condiciones consignadas, declarándose, además, irrevocable la cesión, hecha por «mútua conveniencia y recíproca utilidad» de las partes.

Estos apéndices al pacto internacional tan ruidosamente aplaudido, serían dignos de la hidalguía del Gobierno y del pueblo vecino, que registran á su haber, en sus relaciones con el nuestro, tantos actos benévolos y amistosos, inspirados en la «gran política» inaugurada en 1851, que se derivaba del convencimiento de que nuestra paz, nuestra prosperidad y engrandecimiento, nuestra propia dignidad de nación,—tratándose de un Estado colindante á cuya formación había contribuído,—constituían un bien entendido interés del Brasil.

---

Queda hecha, como me había propuesto y prometido, la ligera exposición y examen de la «vía crucis» de nuestras líneas divisorias.

Se desprende, de todo lo que se acaba de leer y recordar, más de una enseñanza.

Nuestras pasiones partidarias, nuestros odios y mezquindades personales, han perjudicado, en lo general, intereses sagrados de la patria, doliente y desgraciada.

No hemos sabido, no hemos podido acallar aquellas pasiones, sobreponernos á odios y malquerencias para considerar con calma y patriotismo los problemas de nuestra dignidad y soberanía, como aún hoy mismo sucede, pues nos mantenemos distanciados, incompatibilizados, gobiernos, partidos, altas personalidades, según el bando á que pertenecen, para profundizar y resolver, en común, asuntos orgánicos y trascendentales del país, rehacios para congregarse, ni aún con ese motivo, en un campo neutral, con prescindencia de círculos políticos y sociales.

Hay que propender á reaccionar contra semejante y tan lamentable idiosincracia nacional, causa, explicación de nuestros escasos progresos, relativamente á los que hubiéramos podido realizar, poseedores, como somos, del más hermoso rincón de Sud-América, donde podrán prosperar veinte millones de habitantes.

Una oportunidad se ofrece, en estos momentos, para orientar á nuestra República hacia los horizontes de su engrandecimiento definitivo, moral y material, social y político, con la ayuda, con las luces, con los anhelos de todos sus hijos de mayor preparación y competencia: la reforma de la constitución.

Debemos tratar de hacer vida nueva, sobre la base de una carta orgánica que, ante todo, impida el ostracismo dentro de la patria misma, única y fundamental garantía de paz y concordia nacional, inspirándonos precisamente en la contemplación de nuestros errores, de nuestros extravíos, de nuestras vehemencias é intransigencias criminales que, á la par que han ensangrentado el suelo de la patria han hecho con que se hayan cometido tantas y tan amargas injusticias...

Dejémos atrás la infancia disipada y turbulenta de nuestra vida de nación, para emprender, en plena adolescencia, la nueva carrera de pueblo libre, conciente de sus derechos y responsabilidades, que debe conducirnos á los grandiosos destinos que, para la edad madura, nos reserva, seguramente el porvenir.

Pedro S. LAMAS.





